EJE II. POLÍTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

Este Eje General del Plan Estatal se orienta en los esfuerzos de gobierno y sociedad para garantizar entornos de convivencia, con pleno respeto a los derechos humanos. En un horizonte de seis años se reforzarán las acciones de seguridad pública a partir de la prevención del delito, mejoras en procesos de procuración e impartición de justicia para incentivar la denuncia ciudadana, combatir la delincuencia y consolidar la protección civil; se promoverán la gobernabilidad y paz social, se instrumentarán políticas de Estado para combatir los feminicidios y la trata de personas, para atender con justicia y trato digno los casos de personas no localizadas y también para atender las causas y consecuencias del suicidio o el consumo de drogas duras.

Los objetivos de Paz y Seguridad del gobierno de Baja California Sur se materializan en las acciones del Programa "Tu Bienestar Nos Une" con la participación de todas las instituciones de los ámbitos estatal y municipal. De esta manera se busca crear escenarios de paz, estabilidad y armonización social a través de las acciones prioritarias siguientes: audiencias públicas para la atención directa de las y los ciudadanos en búsqueda de mejorar la vida comunitaria; fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública; mejoramiento de la imagen urbana mediante la obra pública, la rehabilitación de la infraestructura deportiva y limpieza de ciudades para lograr entornos comunitarios saludables y seguros; atención médica y psicológica; capacitación para el autoempleo y ofertas laborales, actividades culturales y deportivas para el uso positivo del tiempo libre y la promoción de la participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz.

II.1. SEGURIDAD CIUDADANA

Delincuencia y nivel de confianza

La seguridad es uno de los temas más sensibles y que más preocupan a las y los habitantes de Baja California Sur, particularmente en lo que concierne a los delitos del fuero común. En la última década la tasa de delitos y de víctimas en Baja California Sur han registrado variaciones, con una tendencia a la baja después del año 2014. De acuerdo con los registros más recientes, los que corresponden al año 2020, ocurrieron o se denunciaron 22,739 delitos y 19,580 víctimas mayores de 18 años. El 47 % de las víctimas de delitos en 2020 fueron mujeres.[38]

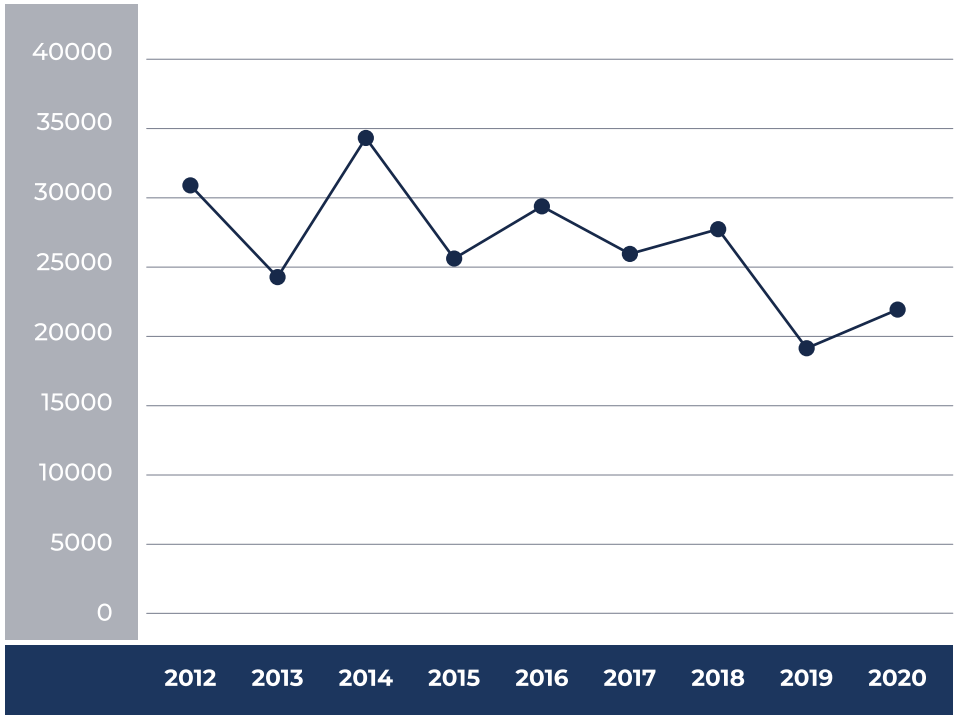
Entre marzo y abril de 2021, las conductas delictivas o antisociales que identificó la población alrededor de sus viviendas en distintas áreas urbanas de Baja California Sur fueron el consumo de alcohol, consumo y venta de drogas en vía pública, asaltos, robos, pandillerismo y presencia de bandas violentas.

Sin embargo, estas conductas e inclusive delitos, no llegan a la denuncia: en 2020, por ejemplo, se calcula que el 90.9% de los delitos ocurridos en Baja California Sur no fueron denunciados debido a la falta de confianza hacia algunas autoridades y el desinterés por la pérdida de tiempo en la presentación de acusaciones.

[38] Tasa del delito, por género 2020 en "Prevalencia delictiva en las personas por sexo". Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). (2021). INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_bcs.pdf.

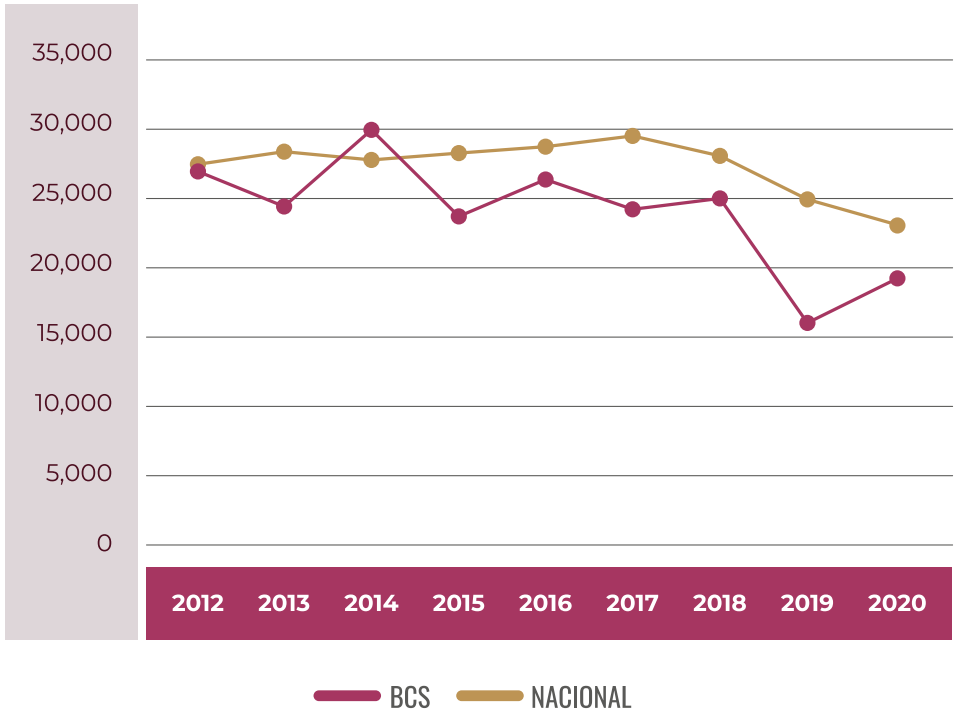
INCIDENCIA DELICTIVA B.C.S.

NÚMERO DE DELITOS (2012-2020)



TASA DE VÍCTIMAS DE DELITO MAYORES DE 18 AÑOS

EN BAJA CALIFORNIA SUR (2012 - 2020)



Fuente: ENVIPE/INEGI

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2021 ponen de manifiesto mayor percepción de confianza ciudadana en Sudcalifornia hacia la Secretaría de Marina con un 93.3%, seguida por la Secretaría de la Defensa Nacional con 90.6%. La Policía de Tránsito cuenta con el menor nivel de confianza.

En cuanto a la percepción de corrupción de las autoridades, el 73.9% en el contexto nacional y el 66.7% en la entidad considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con el 69.7% y el 58.9%, respectivamente.

Con respecto al conocimiento de las acciones para mejorar la seguridad pública, la sociedad sudcaliforniana identifica mayor patrullaje y vigilancia policiaca, mejor alumbrado público, infraestructura deportiva como canchas y parques, operativos contra la delincuencia y mejora del ingreso familiar.

La entidad enfrenta un gran reto, que es la violencia contra las mujeres (delitos contra la libertad y seguridad sexual). El incremento de la violencia apremia a establecer estrategias de prevención y protección; según reportes del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), de enero a agosto de 2021 se registraron 1,372 llamadas para auxilio en el municipio de La Paz y 1,720 en el municipio de Los Cabos, referentes a violencia en la familia.

Con respecto a la capacitación de las corporaciones policiales, esta se realiza con apego al Programa Rector de Profesionalización, que es el documento emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que rige el actuar de las instancias capacitadoras con enfoque policial.

Reinserción social

El Sistema Penitenciario cuenta con una escasa plantilla de personal técnico necesario para cumplir con el Programa Integral de Reinserción Social, así como del personal operativo requerido para garantizar la reclusión de las personas privadas de la libertad, así como el orden y seguridad penitenciaria.

Actualmente se trabaja arduamente en el rubro de la reinserción social de las personas privadas de la libertad, quienes por mandato legal son sujetos de derechos humanos y para lograrlo ha sido necesario consolidar el sistema penitenciario local adecuándose a la nueva visión contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que México es parte.

En cuanto a la infraestructura penitenciaria se avanza en el fortalecimiento principalmente de los centros con la construcción y/o mantenimiento que permitan la seguridad estructural de los centros y garanticen también la seguridad de las personas.

Aunado a ello, se han desarrollado obras de remodelación y ampliación de diversas áreas que integran cada uno de los centros penitenciarios, a fin de incrementar la capacidad de alojamiento y cubrir las necesidades que estos requieran.

Seguridad pública

Para garantizar la seguridad pública, se continua con la operación de puntos de revisión secundaria en todo el estado, ubicados en los Aeropuertos de San José del Cabo; de Cabo San Lucas; de La Paz; en los Aeródromos de Comondú y Loreto; en el Puerto de Santa Rosalía; en el Puerto de Pichilingue; en el Km 21 y en los Filtros de Calafia y de San Ignacio, con la finalidad de detectar personas con mandamientos ministeriales, además de llevar el registro de personas que ingresan y salen del estado.

En todos los puntos de revisión se cuenta con herramientas tecnológicas para la seguridad; sin embargo, derivado de la operación diaria es necesaria la actualización y renovación del equipo tecnológico, mejorar la conexión de internet y de Plataforma México, así como de disponer de un mayor estado de fuerza en los puntos de revisión, particularmente en el norte del estado.

En cuanto al equipamiento policial, se dispone de un registro de armas en la Licencia Oficial Colectiva, ante la Secretaría de la Defensa Nacional, como equipamiento de los elementos de las diversas corporaciones del Estado, así como equipo táctico y de protección adecuado y necesario para el buen desempeño, desarrollo y funciones de los elementos policiales.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN



Objetivo 1. Disminuir las condiciones de inseguridad que fortalecen la violencia en las colonias y barrios, mediante el trabajo comunitario de identificación y localización de sitios inseguros para su intervención y transformación en ambientes libres de violencia y delincuencia.

Estrategia 1.1. Fortalecer la creación de espacios seguros para la convivencia ciudadana, mediante intervenciones comunitarias.

Líneas de acción

1.1.1. Crear unidades comunitarias de información y participación en los barrios y colonias de los 5 municipios del estado, para fortalecer los procesos de información ciudadana y atención de las problemáticas concretas de la comunidad, en coordinación con las dependencias e instituciones de salud, de procuración de justicia, de servicios públicos, de cultura y deporte.

1.1.2. Identificar y localizar sitios que presentan índices altos de incidencia delictiva, a fin de intervenir para conformar grupos de trabajo con integrantes de la comunidad.

1.1.3. Promover el diálogo y el intercambio de ideas para la planeación, organización y evaluación de las acciones de prevención del delito, mediante mesas de seguridad y justicia con la participación ciudadana.

1.1.4. Realizar campañas de sensibilización y de información sobre violencia en el noviazgo, prevención de embarazo adolescente y plan de vida y prevención de violencia contra las mujeres, en coordinación con las instancias correspondientes.

1.1.5. Desarrollar y operar un Sistema de Información Estatal de análisis de incidencia delictiva y factores de riesgo del estado.

1.1.6. Impulsar el funcionamiento del Consejo Estatal y Consejos Municipales de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.

1.1.7. Ampliar los mecanismos de participación ciudadana en temas estratégicos de sus comunidades, mediante consultas, mesas de trabajo y organización de redes.

1.1.8. Elaborar diagnósticos participativos que permitan identificar las causas de la violencia.

1.1.9. Impulsar la creación de redes ciudadanas en las colonias y comunidades del estado.

1.1.10. Implementar modelos de resolución de conflictos en los entornos comunitarios, mediante la cultura de paz.

Objetivo 2. Fortalecer la prevención del delito con participación ciudadana, bajo las dimensiones de desarrollo sostenible, social, de respeto a los derechos humanos y de igualdad de género, contribuyendo al bienestar sudcaliforniano.

Estrategia 2.1. Establecer una policía de prevención social de las distintas modalidades de violencia e impulsar las acciones de prevención del delito, encaminadas a la construcción del tejido social en las zonas que presentan mayores factores de riesgo para la comisión de delitos como el rezago social y la marginación.

Líneas de acción

2.1.1. Promover mediante esquemas de participación el respeto y la inclusión social de todas las personas, sin menoscabo de su edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, situación económica o condición de salud, a fin de generar sinergias de civilidades y respeto.

2.1.2. Impulsar foros y conferencias sobre los factores de riesgo que propician la violencia de género en todas las escuelas del estado.

2.1.3. Establecer el Programa de Ciudades Seguras para Mujeres, a fin de prevenir la violencia y concientizar sobre el respeto de los derechos de las mujeres y sus vidas.

2.1.4. Consolidar políticas de pleno respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad de género, mediante acciones de profesionalización, capacitación y sensibilización a todos los actores estratégicos y a la sociedad en general.

2.1.5. Fomentar la cultura de la legalidad y la eliminación de las incivilidades, mediante acciones que promuevan el respeto a las leyes y a la solución pacífica de conflictos, involucrando a la ciudadanía en la solución de problemas comunitarios.

2.1.6. Promover la vinculación de egresados de las universidades para que realicen sus prácticas profesionales en las comunidades, desarrollando programas de cultura de paz y no violencia.

2.1.7. Fomentar la cultura de igualdad que promueva derechos para todas las personas, buscando reducir las brechas de género en cuanto a participación social.

2.1.8. Intervenir los espacios públicos mejorando su infraestructura urbana, fortaleciendo las actividades económicas del entorno, para generar ambientes sanos y de convivencia familiar.

2.1.9. Generar una cultura de educación ambiental en los espacios públicos, promoviendo la convivencia y los lazos por la comunidad.

2.1.10. Impulsar programas que mejoren las condiciones de vida de las personas, mediante el fomento de esquemas de organización para el trabajo.

2.1.11. Impulsar la participación de las y los jóvenes a través del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

2.1.12. Impulsar actividades culturales y artísticas en los espacios públicos, para promover el trato igualitario, el respeto y coadyuvar para la construcción del tejido social.

2.1.13. Promover mejoras en la seguridad laboral y en las percepciones salariales de los elementos de las policías, así como impulsar el servicio civil de carrera.

Objetivo 3. Formar y profesionalizar a los integrantes de las instituciones de seguridad pública de la entidad, garantizando policías altamente capacitados y con seguridad laboral que cumplan cabalmente con sus obligaciones, que se dirijan con vocación y espíritu de servicio, aplicando los principios de igualdad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Estrategia 3.1. Trabajar con la participación de instructores y docentes que cumplan con los perfiles y conocimientos para impartir capacitaciones en temas específicos, así como fortalecer la plantilla de personal en los centros penitenciarios para cumplir con el Programa Integral de Reinserción Social.

Líneas de acción

3.1.1. Reforzar los vínculos de coordinación entre las instancias de los tres niveles de gobierno para atender de manera eficiente la problemática delictiva.

3.1.2. Fortalecer la inteligencia policial en el ámbito de seguridad pública con respecto a las funciones de la policía preventiva, con el uso de mapas delictivos.

3.1.3. Gestionar todo el equipamiento policiaco que garantice las condiciones mínimas de seguridad social, respaldo legal y salarios dignos.

3.1.4. Promover una estrategia de vigilancia en los municipios, con la participación de las instituciones de seguridad mediante operativos conjuntos, a fin de que las corporaciones participen en la resolución de conflictos en la comunidad.

3.1.5. Fortalecer la coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría para atacar delitos de narcomenudeo y homicidios dolosos que pudieran involucrar a la delincuencia organizada.

3.1.6. Capacitar de manera permanente a los integrantes de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia.

3.1.7. Generar programas de estudios para la certificación nacional e internacional, con una visión homogénea para todas las corporaciones policiales.

3.1.8. Desarrollar y aplicar un programa de capacitación para las empresas de seguridad privada del estado, para fortalecer su desempeño como coadyuvantes en la función de seguridad.

Objetivo 4. Fortalecer la formación inicial del personal de nuevo ingreso, a través de la capacitación de todos los elementos de las corporaciones, dotándolos de conocimientos y herramientas metodológicas y operativas para la función de seguridad pública.

Estrategia 4.1. Desarrollar un programa de capacitación permanente para el personal de nuevo ingreso, con la participación de instructores y docentes con amplia experiencia.

Líneas de acción

4.1.1. Impartir cursos y talleres de capacitación constante a integrantes de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia.

4.1.2. Fortalecer la coordinación con los enlaces de las corporaciones policiales de la entidad para planear, programar y realizar las acciones de capacitación.

Objetivo 5. Generar en la sociedad sudcaliforniana un ambiente de seguridad humana en un estado de derecho que imparta justicia pronta y expedita, con una policía confiable y profesional, con pleno respeto de los derechos humanos, y las diversas entidades culturales, mujeres, jóvenes, niñas, niños y grupos vulnerables, mediante la prevención en coordinación con los tres órganos de gobierno y la participación ciudadana.

Estrategia 5.1. Incrementar la eficiencia en la capacidad de respuesta de las policías en el estado, mediante acciones conjuntas para optimizar las labores de la policía estatal, combatir la delincuencia y prevenir la comisión de delitos generando una mayor cercanía y confianza con la ciudadanía.

Líneas de acción

5.1.1. Mantener una presencia policial continua en territorio para crear mayor confianza con la sociedad.

5.1.2. Fortalecer el monitoreo preventivo a través del sistema de videovigilancia, a fin de detectar conductas de riesgo, hechos delictivos o emergencias, permitiendo una atención inmediata y la disuasión de actos ilícitos.

Objetivo 6. Retomar un aspecto importante dentro de la cadena de seguridad y justicia, que es la reinserción de las personas que han cumplido con una condena para cerrar el ciclo que implica el proceso legal y social, de una persona cuando ha estado recluida.

Estrategia 6.1. Generar condiciones que les permitan integrarse a la sociedad de manera activa y productiva, una vez que cumplen su condena y prevenir la reincidencia.

Líneas de acción

6.1.1. Revisar los programas de reinserción que se realizan en los 4 penales del estado.

6.1.2. Fortalecer las actividades que se le brindan a los internos, principalmente en temas de capacitación para el trabajo.

6.1.3. Dar seguimiento al entorno de quien está por cumplir con una sentencia, para garantizar un contexto favorable para su reintegración familiar y en la comunidad.

6.1.4. Reforzar la atención psicológica, que sea no solo para el interno, sino para su familia.

6.1.5. Mejorar las cárceles de la entidad, tanto eninfraestructura como en atención y programas a favor de la población penitenciaria.

METAS



- Instalar y poner en operación unidades comunitarias de información y participación en colonias/barrios prioritarios.

- Conformar y registrar grupos de trabajo comunitario en sitios priorizados, para la prevención del delito y el seguimiento de acciones comunitarias.

- Realizar mesas de trabajo de seguridad y justicia con participación ciudadana.

- Diseñar e implementar campañas de sensibilización e información para la prevención del delito/violencias y factores de riesgo.

- Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y mantener en operación una plataforma/sistema estatal para el análisis de incidencia delictiva y factores de riesgo, con integración de fuentes y protocolos de actualización.

- Generar informes mensuales de incidencia delictiva para la focalización de esfuerzos preventivos.

- Calcular y reportar la tasa de delitos para el seguimiento de tendencias.

- Instalar/activar y mantener en funcionamiento el Consejo Estatal y los Consejos Municipales, mediante sesiones, acuerdos y seguimiento.

- Organizar y formalizar redes de participación ciudadana para la convivencia segura.

- Elaborar diagnósticos participativos para identificar causas de la violencia y condiciones de inseguridad en zonas priorizadas.

- Crear redes ciudadanas en colonias y comunidades para la prevención y la convivencia segura.

- Impartir talleres de resolución de conflictos en entornos comunitarios.

- Realizar conferencias en materia de esquemas de respeto e inclusión social de todo tipo de persona.

- Realizar foros sobre factores de riesgo que propician la violencia de género.

• Promover el establecimiento de Ciudades Seguras para Mujeres a fin de prevenir la violencia y respetando sus derechos.

• Realizar talleres para consolidar políticas de pleno respeto a los derechos humanos.

• Promover ferias para fomentar la cultura de la legalidad y a la solución pacífica de conflictos.

• Elaborar un programa de vinculación para que realicen prácticas profesionales los egresados de universidades.

• Llevar a cabo talleres para el fomento de la cultura de la igualdad que promueva derechos para todas las personas.

• Mejorar los espacios públicos para generar ambientes sanos y de convivencia familiar.

• Elaborar un programa que genere educación ambiental en los espacios públicos.

• Realizar programas de fomento de esquemas de organización para el trabajo.

• Promover la participación de los jóvenes en el Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

• Impulsar la realización de murales que fomenten las actividades culturales y artísticas.

• Realizar programas de recursos humanos a personal de seguridad para mejoras salariales e impulsar el servicio civil de carrera.

• Hacer reuniones de vinculación entre las instancias de los tres niveles de gobierno.

• Realizar informe de los resultados de los indicadores de gobernabilidad.

• Elaborar mapas delictivos de fortalecimiento a la inteligencia policial en seguridad pública.

• Gestionar equipamiento policiaco que garantice seguridad social.

• Realizar operativos como estrategia de vigilancia en los municipios.

• Realizar operativos en coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría.

• Generar informes de los Delitos registrados.

• Registrar las víctimas que han sido afectadas por un delito.

• Capacitar permanentemente al personal de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

• Evaluar al personal en materia de Control de Confianza.

• Capacitar a elementos de Seguridad para un mejor trato a la ciudadanía.

• Obtener certificaciones nacionales y/o internacionales para elementos de las corporaciones policíacas, mediante programas de formación y evaluación correspondientes.

• Implementar programas de capacitación dirigidos a empresas de seguridad privada, para fortalecer su desempeño como coadyuvantes en la función de seguridad, con registro de contenidos y participación.

• Impartir talleres de capacitación al personal de nuevo ingreso de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia.

• Realizar mesas de trabajo con enlaces de las corporaciones para planear y programar acciones de capacitación.

• Hacer recorridos para mantener una presencia policial.

• Registrar los accidentes de tránsito durante los recorridos policiales.

• Realizar monitoreos preventivos (paneos) a través del sistema de videovigilancia para detectar conductas de riesgo, hechos delictivos o emergencia.

• Realizar reuniones para revisar los programas de reinserción en los centros penitenciarios.

• Realizar actividades de capacitación para el trabajo dirigidas a las personas internas.

• Dar seguimiento al entorno de quien está por cumplir con una sentencia.

• Otorgar consultas psicológicas a internos y sus familiares.

• Realizar obras de mejoramiento y/o rehabilitaciones en los Centros Penitenciarios.

INDICADORES



- Número de unidades comunitarias de información y participación en barrios y colonias instaladas.
- Número de grupos de trabajo comunitario en sitios con alta incidencia delictiva conformados.
- Número de mesas de trabajo de seguridad y justicia con participación ciudadana realizadas.
- Número de campañas de sensibilización e información en materia de prevención de violencias y factores de riesgo realizadas.
- Número de Sistemas de Información Estatal de incidencia delictiva y factores de riesgo implementados.
- Número de informes mensuales de estadistica de violencia delictiva elaborados.
- Número de informes de la tasa de delitos elaborados.
- Número de Consejos (Estatal y Municipales) para la prevención del delito establecidos.
- Número de redes de participación ciudadana organizadas.
- Número de diagnósticos participativos realizados.
- Número de redes ciudadanas en colonias y comunidades creadas.
- Número de talleres de resolución de conflictos realizados.
- Número de conferencias de participación el respeto y la inclusión social de todas las personas realizadas.
- Número de foros sobre factores de riesgo que propician la violencia de género realizados.
- Programa “Ciudades Seguras para Mujeres” establecido.
- Número de talleres de profesionalización, capacitación y sensibilización realizadas.
- Número de ferias de fomento a la cultura de la legalidad realizadas.
- Número de programas de vinculación de egresados de las universidades para realizar prácticas profesionales promovidos.
- Número de talleres de fomento a la cultura de la igualdad realizadas.
- Número de espacios públicos intervenidos.
- Número de programas para generar una cultura de educación ambiental realizados.
- Número de programas de fomento esquemas de organización realizados.
- Número de jóvenes al Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” atendidos.
- Número de murales culturales y artísticos realizados.
- Número de programas de fortalecimiento de recursos humanos en instituciones de seguridad pública y justicia implementados.
- Número de reuniones de vinculación entre instancias de los tres niveles de gobierno realizadas.
- Número de informes de resultados de los indicadores de gobernabilidad elaborados.
- Número de mapas delictivos para favorecer la inteligencia policial realizados.
- Número de equipos de equipamiento policial para mejorar las condiciones de seguridad social y laboral gestionados/adquiridos.
- Número de operativos conjuntos con instituciones de seguridad realizados.
- Número de operativos coordinados con la Fiscalia y la Procuraduría realizados.
- Número de informes sobre delitos registrados elaborados.
- Número de informes sobre total de víctimas registradas elaborados.
- Número de capacitaciones dirigadas al personal de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia impartidas.
- Número de elementos de seguridad evaluados en Control de Confianza.
- Número de elementos de seguridad capacitados en atención a víctimas y trato a la ciudadanía.
- Número de certificaciones por elementos de las corporaciones policíacas obtenidas.
- Número de programas de capacitación para empresas de seguridad privada implementados.
- Número de talleres de capacitación a las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia impartidos.
- Número de mesas de trabajo para programar las acciones de capacitación realizadas.
- Número de recorridos policiales para mantener presencia policial en el territorio realizados.
- Número de informes de accidentes de tránsito durante los recorridos policiales registrados.
- Número de monitoreos preventivos mediante el sistema de videovigilancia realizados.
- Número de reuniones para revisar programas de reinserción en los centros penitenciarios realizadas.
- Número de personas internas participantes en actividades de capacitación para el trabajo registradas.
- Número de personas con seguimiento al entorno previo a su reintegración familiar y comunitaria registradas.
- Número de consultas de atención psicológica realizadas.
- Número de obras realizadas con respecto a las obras programadas.



II.2. PROCURACIÓN DE JUSTICIA

La procuración de justicia eficaz, pronta, imparcial y oportuna se traduce en bienestar social cuando las personas que sufren un hecho delictivo encuentran apoyo y respuesta de las instituciones. La procuración de justicia es fundamento del Estado de Derecho que debe prevalecer en todas las sociedades, y es un compromiso aceptado llevar a cabo acciones orientadas a establecer una institución fortalecida, renovada, profesional, honorable y cercana a la ciudadanía.

Evaluar los resultados de la institución encargada de la procuración de justicia en Baja California Sur ha permitido redirigir los objetivos y acciones encaminadas a disminuir la incidencia delictiva y erradicar todo tipo de violencia e impunidad, con el propósito de lograr una sociedad más inclusiva y en paz.

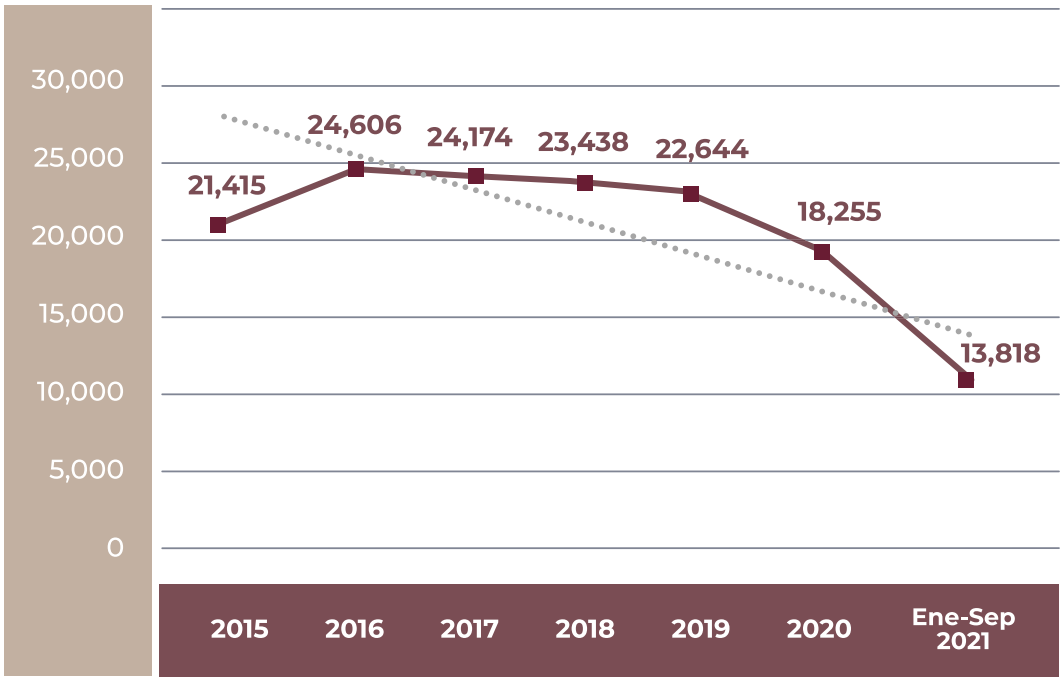
De acuerdo con las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y como resultado del trabajo conjunto entre autoridades y los tres niveles de gobierno, del año 2015 a septiembre de 2021 disminuyó el índice delictivo, cerrando el 2020 con un 14.7% menos al de cinco años atrás, lo que ubicó al estado en el sexto lugar entre los estados de la República con menor incidencia delictiva. En 2021, la incidencia delictiva fue de 18,677, por lo que Baja California Sur continúa en el sexto lugar.

Actualmente, el 80% de las solicitudes de órdenes de aprehensión se libran y en los últimos 3 años se ha incrementado en más del 300% la medida cautelar de prisión preventiva. La judicialización se ha realizado también con mayor eficiencia: en el año 2015 se tenían 500 carpetas de investigación judicializadas y en el 2019 el número de carpetas alcanzado fue de 3,200, aproximadamente, mientras que de enero a noviembre de 2021 la cifra ascendió a 2,700 carpetas.

Con respecto a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021), es preciso señalar que la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes fue del 22.7 por debajo de la media nacional que alcanzó el 30.6%, que ubica a Baja California Sur en el lugar 10 en el ámbito nacional, con menos delitos por cada 100,000 habitantes.

COMPORTAMIENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA

2015-2021



Fuente: Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal para el Estado de Baja California Sur, partiendo de la premisa “Sin justicia no puede haber paz”, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, subraya que la Seguridad y Justicia Penal como actividad esencial del Estado es una de las más importantes para la ciudadanía, dado el alto impacto que tiene en la vida de las personas, al grado que durante la última encuesta de Victimización (ENVIPE) elaborada por el INEGI, se reportó como principal causa de preocupación de los habitantes sudcalifornianos la inseguridad. Sin embargo, ante la falta de soluciones y avances en la investigación y prevención del delito, se denuncian únicamente el 10.1 de los delitos cometidos, y tomando en consideración que según datos de México Evalúa, Baja California Sur es la quinta entidad con más agencias y agentes del Ministerio Público, junto con más peritos, por cada cien mil habitantes.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN



Objetivo 1. Fortalecer y garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, imparcial transparente y profesional a toda la ciudadanía, implementando acciones eficientes y eficaces en el proceso judicial por parte de los servidores públicos, en apego al marco legal y a los derechos humanos, procurando el bienestar a los sudcalifornianos.

Estrategia 1.1. Acceso a la justicia.

Líneas de acción

1.1.1. Incrementar la judicialización de carpetas de investigación.

1.1.2. Fomentar y difundir a nivel estatal, la denuncia de todo tipo de delitos con la participación de la sociedad civil y servidores públicos, a través de sus diversos mecanismos de denuncia.

Objetivo 2. Fomentarl el uso de los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal (MASC), con un enfoque de calidad en el servicio, con calidez humana y mejora continua, dando solución a su conflicto de forma expedita y reparación del daño en aquellos casos en que la ley lo permita, mediante la mediación, conciliación y la junta restaurativa.

Estrategia 2.1. Justicia restaurativa para restaurar la paz.

Líneas de acción

2.1.1. Promover e impulsar en la ciudadanía el uso de los MASC en Materia Penal, en aquellos asuntos cuya naturaleza y voluntariedad de las partes en conflicto así lo permita, a fin de dar solución temprana a conflictos entre particulares en protección de su integridad, sus bienes y derechos.

2.1.2. Contar con personal capacitado en el Órgano Especializado en Mecanismos de Solución de Controversias (OEMASC).

Objetivo 3. Combatir la impunidad y la corrupción para tener una justicia con absoluta certeza y respeto a los derechos humanos.

Estrategia 3.1. Investigación y persecución del delito.

Líneas de acción

3.1.1. Mantener a Baja California Sur dentro de los 10 estados con menor incidencia delictiva.

3.1.2. Fortalecer la capacitación de los Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de Investigación.

Objetivo 4. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia, a fin de erradicar todas las formas de violencia en razón de género.

Estrategia 4.1. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia, a fin de erradicar todas las formas de violencia en razón de género.

Líneas de acción

4.1.1. Proponer modificaciones o reformas a la legislación en materia penal para erradicar la violencia en razón de género.

4.1.2. Impartir capacitación al personal del Centro de Justicia para las Mujeres, acorde con el Modelo de Actuación con Perspectiva de Género e Inclusión.

4.1.3. Implementar y difundir el protocolo de actuación y seguimiento de medidas de protección para las mujeres.

4.1.4. Promover y difundir los servicios que presta el Centro de Justicia para las Mujeres.4.1.5. Fortalecer la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos del Centro de Justicia para las Mujeres.4.1.6. Contar con personal capacitado en el Órgano Especializado en Mecanismos de Solución de Controversias (OEMASC).

4.1.6. Garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia.

Objetivo 5. Capacitación continua de la Dirección de Servicios Periciales, equipamiento, crecimiento de instalaciones y aumentar las especialidades que se permitan, a fin de fortalecer las investigaciones ministeriales.

Estrategia 5.1. Capacitacion continua del personal de servicios periciales. nvestigación y persecución del delito.

Líneas de acción

5.1.1. Capacitación continua del personal de servicios periciales estatal y la ampliación de los servicios periciales.

Objetivo 6. Garantizar la seguridad pública y fortalecer un entorno de paz mediante acciones eficaces de prevención, justicia y proximidad social.

Estrategia 6.1. Reforzar los sistemas de inteligencia e investigación para optimizar la atención a delitos, asegurando la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

Líneas de acción

6.1.1. Impulsar el fortalecimiento digital como herramienta que apoye a mejorar los procesos penales.

6.1.2. Reforzar el equipamiento en el área de análisis, inteligencia y política criminal.

6.1.3. Reforzar el equipamiento en el Área de Análisis, Inteligencia y Política Criminal en materia de Feminicidio.

6.1.4. Reforzar el equipamiento en el Área de Análisis, Inteligencia y Política Criminal en materia de Trata de Personas.

Estrategia 6.2. Abordar las causas estruturales de la violencia para construir una sociedad basada en la paz y la justicia social.

Líneas de acción

6.2.1. Implementar programas del modelo de prevención de delito en coordinación con los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana para disminuir y erradicar la delincuencia en sus diversas modalidades con enfoque especial en niñas niños y adolescentes.

6.2.2. Fortalecer las denuncias recibidas ante el Ministerio Público si de los hechos puestos de su conocimiento se deriva un tipo penal por parte de los servidores públicos que integran la Procuraduría.

6.2.3. Fortalecer las visitas ordinarias y extraordinarias de revisión técnico-jurídicas y administrativas a las diversas áreas de la Procuraduría por parte de Visitaduría.

Objetivo 7. (Consolidación del Sistema de Justicia Penal)

Promover y coordinar las acciones, procedimientos y mecanismos que impulsen la consolidación del Sistema de Justicia Penal en la entidad.

Estrategia 7.1. Consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Líneas de acción

7.1.1. Promover el desarrollo y uso de un sistema informático de gestión integral que optimice la función de los operadores del Sistema de Justicia Penal.

7.1.2. Establecer un mecanismo de evaluación con indicadores estratégicos para la medición de los resultados del proceso penal.

7.1.3. Coordinar la capacitación y especialización de los operadores del sistema de justicia penal en el estado.

METAS



• Incrementar la judicialización de carpetas de investigación para atender una justicia profesional, eficaz, incluyente y cercano a la ciudadanía, con el fin de abatir los índices de delincuencia e impunidad.

• Fomentar y difundir a nivel estatal, la denuncia de todo tipo de delitos con la participación de la sociedad civil y servidores públicos, a través de sus diversos mecanismos de denuncia con el fin de abatir los índices de delincuencia e impunidad.

• Promover e impulsar en la ciudadanía el uso de los MASC en Materia Penal, en aquellos asuntos cuya naturaleza y voluntariedad de las partes en conflicto así lo permita, a fin de dar solución temprana a conflictos entre particulares en protección de su integridad, sus bienes y derechos.

• Capacitar a personal en el Órgano Especializado en Mecanismos de Solución de Controversias (OEMASC).

• Mantener a Baja California Sur dentro de los 10 estados con menor incidencia delictiva.

• Fortalecer la capacitación de los Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de Investigación.

• Proponer modificaciones o reformas a la legislación en materia penal para erradicar la violencia en razón de género que garantice la aplicación de la justicia en todos sus ámbitos.

• Impartir capacitación al personal del Centro de Justicia para las Mujeres, acorde con el Modelo de Actuación con Perspectiva de Género e Inclusión.

• Implementar y difundir el protocolo de actuación y seguimiento de medidas de protección para las mujeres.

• Promover y difundir los servicios que presta el Centro de Justicia para las Mujeres en la atención a mujeres víctimas de violencia en razón de género.

• Fortalecer la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos del Centro de Justicia para las Mujeres.

• Realizar carpetas de judicialización para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia de manera profesional, eficaz, incluyente y cercano a la ciudadanía.

• Contar con personal capacitado para que los dictámenes periciales sean profesionales y científicos que den certeza en el proceso penal.

• Realizar módulos digitales como herramienta que apoye a mejorar los procesos penales.

• Reforzar el equipamiento en el área de análisis, inteligencia y política criminal con equipo tecnológico de última generación para llevar a cabo las labores de análisis, inteligencia y política criminal.

• Reforzar el equipamiento en el Área de Análisis, Inteligencia y Política Criminal en materia de Feminicidio para el fortalecimiento institucional de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio y su Judicialización.

• Reforzar el equipamiento en el Área de Análisis, Inteligencia y Política Criminal en materia de Trata de Personas para el fortalecimiento institucional de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Trata de Personas.

• Implementar programas del modelo de prevención de delito en coordinación con los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana para disminuir y erradicar la delincuencia en sus diversas modalidades con enfoque especial en niñas niños y adolescentes.

• Contar con servidores públicos que den respuesta expedita, ética y profesionalmente a las denuncias recibidas y en apego a los derechos humanos.

• Fortalecer las visitas ordinarias y extraordinarias de revisión técnicojurídicas y administrativas a las diversas áreas de la Procuraduría por parte de Visitaduría.

• Realizar módulos que permitan contar con un sistema informático integral para fortalecer la coordinación entre las instituciones operadoras.

• Evaluar y dar seguimiento al desempeño de las instituciones operadoras del sistema de justicia penal.

• Coordinar cursos para profesionalizar a los operadores del sistema de justicia penal en el Estado.

INDICADORES



- Número de carpetas judicializadas elaboradas.
- Número de actividades de fomento a la denuncia ciudadana realizadas.
- Resolución de carpetas de investigación por acuerdos reparatorios realizadas.
- Número de personal en el Órgano Especializado en Mecanismos de Solución de Controversias capacitado.
- Posición de Baja California Sur en materia de incidencia delectiva alcanzada.
- Número total de capacitaciónes a Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de Investigación realizadas.
- Número de reformas a la legislación en materia penal para erradicar la violencia en razón de género realizadas.
- Número de capacitaciones al personal del CJM impartidas.
- Número de Medidas de proteccion para las mujeres implementadas.
- Número de servicios en el CJM prestados.
- Numero de acciones de mejora en el CJM realizadas.
- Número de carpetas judicializadas a mujeres víctimas de violencia realizadas.
- Número de horas de capacitación realizadas.Número de módulos informáticos implementados.
- Número de dispositivos informáticos en el área de análisis, inteligencia y política criminal adquiridos.
- Número de acciones de equipamiento en el Área de Análisis, Inteligencia y Política Criminal en materia de Feminicidio adquiridos.
- Número de equipamiento en el Área de Análisis, Inteligencia y Política en materia de trata de personas adquiridos.
- Número de actividades del modelo de prevención de delito llevadas a cabo.
- Resolución de carpetas de investigación por acuerdos reparatorios realizadas.
- Número de personal en el Órgano Especializado en Mecanismos de Solución de Controversias capacitado.
- Posición de Baja California Sur en materia de incidencia delectiva alcanzada.
- Número total de capacitaciónes a Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de Investigación realizadas.
- Número de reformas a la legislación en materia penal para erradicar la violencia en razón de género realizadas.
- Número de capacitaciones al personal del CJM impartidas.
- Número de Medidas de proteccion para las mujeres implementadas.
- Número de servicios en el CJM prestados.
- Numero de acciones de mejora en el CJM realizadas.
- Número de carpetas judicializadas a mujeres víctimas de violencia realizadas.
- Número de horas de capacitación realizadas.
- Número de módulos informáticos implementados.
- Número de dispositivos informáticos en el área de análisis, inteligencia y política criminal adquiridos.
- Número de acciones de equipamiento en el Área de Análisis, Inteligencia y Política Criminal en materia de Feminicidio adquiridos.
- Número de equipamiento en el Área de Análisis, Inteligencia y Política en materia de trata de personas adquiridos.
- Número de quejas denunciadas ante el Ministerio Público resueltas.
- Número de visitas ordinarias extraordinarias por la Visitaduría llevadas a cabo.
- Número de módulos informáticos de gestión integral desarollados.
- Número de indicadores estrategicos para la medición de los resultados del proceso penal implementados.
- Número de cursos a operadores del sistema de justicia penal coordinados.



PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

BAJA CALIFORNIA SUR 2021-2027

II.3. PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

La paz social involucra la procuración de justicia para los trabajadores. A través de esta se brindan garantías a sus derechos y se crean condiciones de estabilidad que redundan en inversiones para el bienestar y el desarrollo económico.

Las instituciones encargadas de impartir justicia laboral tienen como objetivo velar, orientar, ejecutar y transmitir mediante diversas estrategias la seguridad laboral, económica y psicológica a las y los trabajadores, así como promover condiciones de igualdad, de equidad y no discriminación.

Es obligación del gobierno prevenir cualquier violación a la legislación laboral, garantizar un estado respetuoso en el cumplimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores, un estado en el que subsista la paz laboral, privilegiando permanentemente el diálogo y la conciliación para solucionar controversias ante cualquier disputa. La conciliación es un propósito y un fin en sí misma, un medio efectivo, eficaz y eficiente de solución de controversias, evitar conflictos y contribuir a la Paz Social.

La población económicamente activa de Baja California Sur es de 426,715 personas (249,403 son hombres y 177,312 mujeres), de las cuales 407,899 se encuentran ocupadas y 18,816 desocupadas, que representan 296,567 asalariados, 77,826 trabajadores por cuenta propia, 25,088 empleadores y 8,418 sin pago y otros, resultando un total de informalidad laboral de 149,894 personas.

La evidente garantía en el cumplimiento de los derechos laborales y las condiciones generales de trabajo, así como la impartición y procuración de justicia laboral en Baja California Sur se manifiesta en la ausencia de huelgas estalladas.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se obtuvieron resultados favorables con 2,295 convenios fuera de juicio a favor de los trabajadores. Para la procuración de justicia laboral, sostener la calidad de las negociaciones implica la capacitación y actualización constantes de los servidores públicos, dotarlos de conocimientos y habilidades a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para abordar los conflictos con base en lo que dicta la ley.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN



Objetivo 1. Asesorar y capacitar en los centros laborales para dar cumplimiento a las condiciones generales de trabajo y seguridad e higiene.

Estrategia 1.1. Incrementar el número de capacitaciones y asesorías en el estado.

Línea de acción

1.1.1. Realizar capacitaciones mensuales a las cámaras de comercio y sectores empresariales.

1.1.2. Capacitar al personal de Inspección laboral para una mejor atención al beneficiario.

Objetivo 2. Incrementar la cobertura de inspecciones a los centros de trabajo, precisando el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y la aplicación de la ley laboral.

Estrategia 2.1. Incrementar el número de inspectores a nivel estatal.

Líneas de acción

2.1.1. Realizar visitas de inspección a los centros de trabajo.

2.1.2. Promover el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, así como del pago oportuno de las prestaciones laborales de los centros de trabajo (jornaleros agrícolas y diferentes sectores empresariales), como son los campos agrícolas.

Objetivo 3. Salvaguardar los derechos laborales de los menores de edad.

Estrategia 3.1. Implementar una difusión permanente a nivel estatal sobre los derechos laborales de los menores de edad y actuar conforme a las directrices del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en materia de trabajo infantil y de menores.

Líneas de acción

3.1.1. Gestionar ante las instancias correspondientes programas de concientización de los derechos laborales de los menores de edad.

3.1.2. Expedir permisos laborales apegados a la Ley Federal del Trabajo.

3.1.3. Instrumentar una estrategia de seguimiento en los centros de trabajo que contraten a los menores de edad.

Objetivo 4. Mantener el equilibrio entre los factores de la producción, vigilando, privilegiando y fortaleciendo la paz laboral, la certeza y seguridad jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y leyes relacionadas.

Estrategia 4.1. Incrementar el porcentaje de conflictos conciliados y el número de asuntos prevenidos.

Línea de acción

4.1.1. Implementar y promover una jornada permanente de conciliación.[39]

4.1.2. Implementar asesorías y foros para la sensibilización entre empleadores y trabajadores.[40]

Estrategia 4.2. Abatir el rezago de impartición de justicia laboral.

Líneas de acción

4.2.1. Incrementar el número de resoluciones emitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

4.2.2. Disminuir el rezago acumulado de expedientes hasta el 2021.[41]

4.2.3. Celebrar convenios de colaboración con las demás Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas de México.

4.2.4. Procurar la impartición de Justicia Laboral Burocrática que conduzca con eficiencia las relaciones entre los trabajadores y los Poderes del Estado. (2025)[42]

[39]Propuesta de la Junta Local de Conciliación Laboral.

[40]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[41]Propuesta de la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo.

[42]Propuesta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los TSEyMBCS

Estrategia 4.3. Fortalecer la capacitación y profesionalizar a los impartidores de justicia laboral.

Línea de acción

4.3.1. Impartir cursos de capacitación y profesionalización.[43]

4.3.2. Capacitar al personal denominado Conciliadores.[44]

Estrategia 4.4. Sistematizar y digitalizar la impartición de justicia laboral.

Línea de acción

4.4.1. Implementar un sistema para digitalizar y sistematizar la impartición de justicia laboral.[45]

Estrategia 4.5. Promover pláticas conciliatorias, proponiendo acuerdos satisfactorios que se adecuen a los intereses de las partes, incrementando las soluciones a los conflictos obrero-patronal para lograr eficiencia en los servicios, así como equilibrio laboral.

Líneas de acción

4.5.1. Incrementar el número de procuradores auxiliares para mejorar los servicios.[46]

4.5.2. Celebrar juntas de avenencia o conciliación, atendiendo a los razonamientos, dudas o quejas que presenten los solicitantes del servicio, para dar soluciones y acuerdos con los que se resuelvan las problemáticas de los trabajadores.[47]

4.5.3. Proporcionar asesoría gratuita privilegiando la conciliación y solución a las problemáticas presentadas para incrementar el número de personas atendidas.

4.5.4. Incrementar el número de Conciliadores para mejorar los servicios.[48]

4.5.5. Celebrar audiencias de conciliación, atendiendo a los razonamientos, dudas o quejas que presenten los solicitantes del servicio, para dar soluciones y acuerdos con los que se resuelvan las problemáticas de ambas partes.[49]

Estrategia 4.6. Mantener al alcance de todos los ciudadanos de los cinco municipios del Estado, la Justicia en materia laboral a través de los Centros de Conciliación Laboral.

Líneas de acción

4.6.1. Crear nuevos Centros de Conciliación Laboral en el Estado.[50]

4.6.2. Implementar foros para la implementación de la reforma laboral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

[43]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[44]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[45]Propuesta de la Junta Local de Conciliación Laboral.

[46]Propuesta de la Procuraduría General de Justicia Laboral.

[47]Propuesta de la Procuraduría General de Justicia Laboral.

[48]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[49]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[50]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

METAS



• Realizar capacitaciones mensuales a las cámaras de comercio y sectores empresariales.

• Realizar capacitaciones mensuales a las personas de las cámaras de comercio y sectores empresariales.

• Otorgar cursos a inspectores laborales para lograr que cada inspección contribuya al bienestar del trabajador.

• Capacitar a inspectores laborales para lograr que cada inspección contribuya al bienestar del trabajador.

• Realizar visitas de inspección a los centros de trabajo.

• Desarrollar inspecciones para el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, así como del pago oportuno de las prestaciones laborales de los centros de trabajo.

• Formular e instrumentar con las instancias correspondientes programas de concientización de los derechos laborales de los menores de edad.

• Otorgar los permisos a menores y adultos mayores para garantizar la protección y trato digno con base en sus derechos.

• Realizar inspecciones en los centros de trabajo que contraten a los menores de edad.

• Incrementar el porcentaje de justicia laboral en el Estado y reforzar la estrategia de conciliación permanente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como en las Juntas Especiales, a fin de privilegiar esta forma de solución de conflictos de manera preventiva y dentro del juicio.

• Implementar asesorías y foros para la sensibilización entre empleadores y trabajadores.[51]

• Incrementar el número de resoluciones emitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

• Disminuir el rezago acumulado de expedientes hasta el 2021.

• Celebrar convenios de colaboración con las demás Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas de México.

• Incrementar progresivamente el número de acciones orientadas a la promoción y atención de la Justicia Laboral Burocrática.[52]

• Impartir cursos de capacitación y profesionalización.[53]

• Capacitar a impartidores de justicia.

• Otorgar cursos a conciliadores en materia de Procuración y Justicia Laboral.

• Capacitar a conciliadores en materia de Procuración de Justicia.

• Crear e instrumentar un sistema para digitalizar y sistematizar la impartición de justicia laboral.

• Incrementar el número de procuradores auxiliares para mejorar los servicios.

• Celebrar juntas de avenencia o conciliación, atendiendo a los razonamientos, dudas o quejas que presenten los solicitantes del servicio, para dar soluciones y acuerdos con los que se resuelvan las problemáticas de los trabajadores.

• Proporcionar asesoría gratuita para la conciliación y solución a las problemáticas presentadas para incrementar el número de personas atendidas.

• Incrementar el número de Conciliadores para mejorar los servicios.[54]

• Realizar audiencias de conciliación, para dar soluciones y acuerdos con los que se resuelvan las problemáticas de ambas partes.[55]

• Crear nuevos Centros de Conciliación Laboral en el Estado.[56]

• Activar mesas de trabajo para la implementación de la Reforma Laboral.

[51]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[52]Propuesta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los TSEyMBCS.

[53]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[54]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[55]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

[56]Propuesta del Centro de Conciliación Laboral.

INDICADORES



- Número de cursos de capacitación al sector empresarial otorgados.
- Número de personas del sector empresarial capacitadas.
- Número de cursos de capacitación a inspectores laborales otorgados.
- Número de inspectores laborales capacitados.
- Número de visitas a centros de trabajo realizadas.
- Número de inspecciones a centros de trabajo realizadas.
- Número de Programas de los derechos laborales a menores de edad implementados.
- Número de permisos laborales a menores y adultos mayores otorgados.
- Número de inspecciones a contratos de menores de edad realizadas.
- Porcentaje de asuntos prevenidos y conciliados.
- Número de expedientes de conciliación concluidos.
- Número de conflictos conciliados.
- Número de resoluciones emitidas.
- Porcentaje del rezago de resolución disminuidos.
- Número de convenios de colaboración con otras Juntas celebrados.
- Número de acciones para impartición de Justicia Laboral Burocrática promovidas y atendidas.
- Número de cursos de capacitación a impartidores de justicia otorgados.
- Número de impartidores de justicia beneficiados.
- Número de cursos de capacitación a conciliadores otorgados.
- Número de conciliadores capacitados.
- Número de Sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC`S creados.
- Número de Procuradores Auxiliares.
- Número de audiencias atendidas.
- Número de asesorías para la conciliación y solución proporcionadas.
- Número de conciliadores nuevos contratados.
- Número de audiencias de conciliación realizadas.
- Número de nuevos Centros de Conciliación Laboral creados.
- Número de foros en materia de la reforma laboral realizados.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

BAJA CALIFORNIA SUR 2021-2027



II.4. GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL

Una de las preocupaciones del estado es mantener la estabilidad social. En la actualidad se registra una importante presencia de expresiones ciudadanas que promueven el consenso; sin embargo, igualmente existen manifestaciones que en ocasiones generan desacuerdos y resistencias, ante lo cual el gobierno debe desplegar la capacidad de diálogo y llevar a cabo acciones concretas que prevengan y atiendan todas aquellas demandas o situaciones que representen un riesgo para la estabilidad política, para el desarrollo social y económico, la paz social y el bienestar de toda la ciudadanía.

El reto es construir un escenario con equilibrios, diálogo y tolerancia, lo que implica escuchar todas las voces, atender las demandas ciudadanas y generar mecanismos de conciliación cuando se presentan conflictos.

El Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2010-2020 formulado por Fundación Konrad Adenauer, Polilat, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio de México (Colmex), permite conocer el estado de la democracia mexicana con base en indicadores elaborados a partir de elementos de orden jurídico, político, civil, económico y social; así es posible tener una visión multinivel del estatus de la democracia en México, toda vez que muestra los indicadores relativos al contexto nacional y un desglose de las condiciones democráticas en las entidades federativas.

A través de estos se presenta una visión integral de la democracia mexicana, así como su impacto institucional para la protección de los derechos, las igualdades y las libertades de los mexicanos.

En su edición el IDD-MEX 2015 se estructura para medir cuatro dimensiones de la democracia mexicana: 1) Democracia de los Ciudadanos, 2) Democracia de las Instituciones, 3) Democracia Social y 4) Democracia Económica.

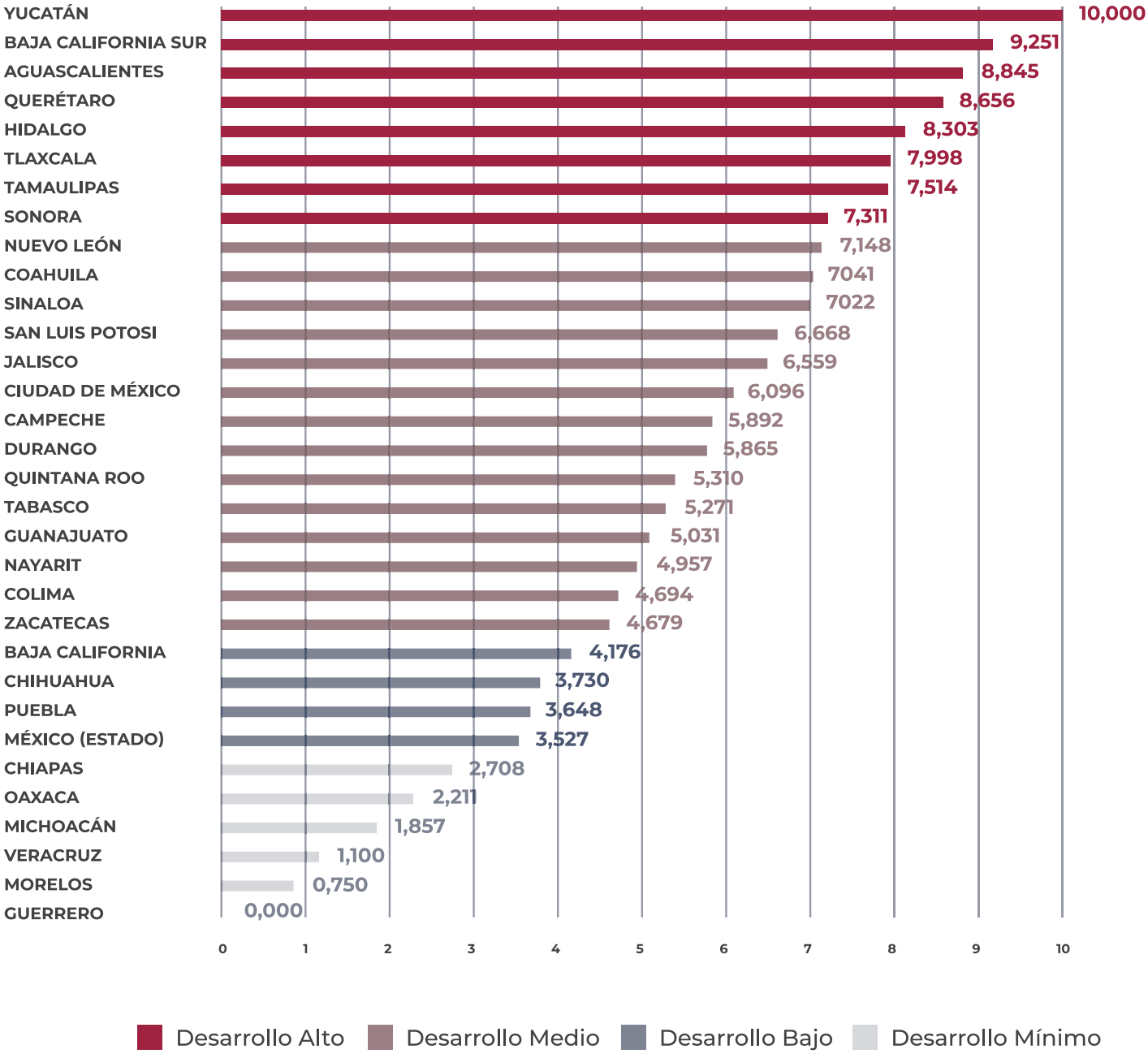
En el Índice 2020, el estado de Baja California Sur obtuvo 9,251 puntos y se ubicó en la posición 2 a nivel nacional.

Baja California Sur registra 9,251 puntos, valor menor al del 2019 (de 9,917 puntos), aunque esto no significa un retroceso en su posición en el ranking, ya que se mantiene en el segundo lugar continuando en el grupo que lidera el desarrollo democrático en el país.

Su pérdida de puntaje obedece particularmente a la disminución que presenta en Democracia de las Instituciones, donde pierde su posición de entidad con alto desarrollo democrático y pasa a tener desarrollo medio; así como la disminución que presenta en Democracia Social, donde pierde el liderazgo y con ello su intensidad de desarrollo, pasando de alta a media. Esta intensidad de desarrollo es la que se observa en el resto de las dimensiones.

En Democracia Económica y Democracia de los Ciudadanos es en donde logra mejorar su puntuación con respecto al 2019. Baja California Sur es una entidad que, en los diez años de medición del IDD-Mex, ha obtenido puntuaciones de alto desarrollo democrático, salvo en dos oportunidades: 2015 y 2018. En todas las dimensiones se posiciona entre los primeros diez lugares y logra superar el promedio.

RANKING DEL IDD-MEX 2020



ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DATOS DEL IDD-MEX 2020.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo general

Contribuir a la construcción de una sociedad integrada, inclusiva y segura, con la participación proactiva de las instituciones de gobierno y ciudadanía, operando en las áreas urbanas y suburbanas, con atención prioritaria en las colonias que presentan una mayor incidencia delictiva, a través de la implementación de políticas de carácter social, económico y de seguridad pública.

Gobernabilidad y paz social

Objetivo 1. Mantener la paz social a través del equilibro, el diálogo y la tolerancia.

Estrategia 1.1. Establecer un Gobierno confiable, cercano a la gente, abierto al diálogo y conciliador, que atienda las demandas ciudadanas y genere estabilidad y paz social.

Líneas de acción

1.1.1. Impulsar mecanismos de diálogo para la resolución pacífica de conflictos y atención de demandas de la sociedad.

1.1.2. Fortalecer la coordinación entre los Poderes del Estado y los sectores público, privado y social.

1.1.3. Garantizar a los ciudadanos espacios de colaboración y participación en la toma de decisiones del gobierno.

1.1.4. Coordinar una red de colaboración interinstitucional para la recepción, gestión y seguimiento a las peticiones de la población.

1.1.5. Fomentar los valores cívicos con el apoyo de los sectores público, privado y social.

1.1.6. Fomentar una relación respetuosa del gobierno con las asociaciones y grupos religiosos.

1.1.7. Fortalecer la relación respetuosa del gobierno con partidos y agrupaciones políticas.

1.1.8. Fortalecer la relación institucional con los gobiernos municipales.

Objetivo 2. Mantener la paz social a través de la cultura de la legalidad y el respeto a los Derechos Humanos.

Estrategia 2.1. Contribuir a generar certeza jurídica para por parte de los agentes del estado a la ciudadanía como base de estabilidad y armonía social.

Línea de acción

2.1.1. Proporcionar servicios de defensa jurídica gratuita y de calidad.

2.1.2. Brindar asesoría y representación jurídica al poder ejecutivo.

2.1.3. Vigilar y promover la constitucionalidad y legalidad del marco jurídico estatal.

2.1.4. Garantizar el respeto a la legalidad a través de la validación de instrumentos jurídicos.

2.1.5. Promover, contribuir y vigilar el cumplimiento de la actividad notarial en el Estado, y en la procuración de garantías y legalidad.

2.1.6. Proporcionar servicios de asesoría jurídica gratuita y de calidad a víctimas del delito.

METAS



- Establecer acciones de diálogos de resolución pacífica de conflictos y demandas.
- Realizar acciones de coordinación con diferentes actores de la sociedad.
- Establecer espacios de participación de la sociedad civil organizada.
- Formar una red interinstitucional de atención ciudadana.
- Realizar eventos para fomentar los valores cívicos con el apoyo de los sectores público, privado y social.
- Realizar sesiones de trabajo con las asociaciones religiosas.
- Realizar sesiones de trabajo con partidos y agrupaciones políticas.
- Establecer representaciones estatales en los municipios y hacer acciones de coordinación intermunicipales.
- Brindar servicios de defensa jurídica gratuita y de calidad a quien así lo requiera.
- Representar al poder ejecutivo en materia de jurídica contenciosa.
- Garantizar la legalidad y constitucionalidad del marco jurídico estatal.
- Promover y vigilar la legalidad de los instrumentos jurídicos relativos a la Administración Pública Estatal.
- Garantizar el cumplimiento y vigilancia de las actividades notariales en la entidad.
- Garantizar la prestación oportuna y eficiente de servicios de asesoría jurídica a víctimas del delito.

INDICADORES



- Número de acciones de conflictos y demandas de la sociedad atendidas.
- Número de acciones de coordinación entre los Poderes del Estado y los sectores público, privado y social realizadas.
- Número de espacios de colaboración a la sociedad establecidos.
- Número de acciones para gestión, atención o seguimiento de peticiones realizadas.
- Número de eventos para fomentar los valores cívicos realizados.
- Número de sesiones con asociaciones religiosas realizadas.
- Número de sesiones con partidos y agrupaciones políticas realizadas.
- Número de acciones de coordinación municipal realizadas.
- Número de acciones de defensa jurídica realizadas.
- Número de acciones de asesorías y representaciones jurídicas realizadas.
- Número de asuntos jurídicos atendidos.
- Número de instrumentos jurídicos revisados.
- Número de atenciones y de formalización de actos realizados.
- Número de atenciones de asesoría jurídica a víctimas del delito realizados.



II.5. PROTECCIÓN CIVIL

De acuerdo con las leyes mexicanas, la protección civil es “una acción solidaria y participativa mediante la cual se adoptan medidas universales para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura en general, la planta productiva y el medio ambiente”.

Baja California Sur se sitúa en una zona que registra fenómenos perturbadores especialmente hidrometeorológicos, que amenazan y significan peligro principalmente en la temporada de ciclones tropicales; su ubicación y características geográficas favorecen la presencia de lluvias y ciclones tropicales provenientes del Océano Pacífico que regularmente, año con año, afectan de manera directa o indirecta causando en la mayoría de los casos lluvias torrenciales cuyo promedio excede los 300 milímetros de acumulación de agua, siendo estos los que generan la mayoría de los daños en los municipios y comunidades del litoral costero del estado.

Con el fin de garantizar un entorno seguro para las personas y sus bienes la actual administración de gobierno está empeñada en fortalecer aún más la prevención que a lo largo de los años ha adquirido la ciudadanía sudcaliforniana; conjuntamente con los gobiernos de los tres órdenes y las organizaciones de la sociedad civil han estado siempre atentos a desarrollar acciones en materia de protección civil antes, durante y después de cualquier eventualidad para la prevención y atención de situaciones que ponen en riesgo la vida.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo General. Promover una gobernanza de prevención, identificación y reducción de desastres, mediante la cultura de la protección civil y de la gestión integral de riesgos, a través de la colaboración institucional y la participación social con el propósito de garantizar la vida, integridad personal y el patrimonio de la sociedad, para construir un Estado sostenible, seguro y resiliente, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a desastres para una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción.

Objetivo 1. Fortalecer la cultura de la protección civil en la entidad, a fin de proteger a la población y a su patrimonio de riesgos y contingencias por fenómenos naturales, más las ocasionadas por los seres humanos.

Estrategia 1.1. Promover la gestión integral de riesgos y la protección civil, que incida de forma transversal en las políticas públicas.

Línea de acción

1.1.1. Capacitar y sensibilizar al funcionariado público en materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como a la población en general, con enfoques de perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.

1.1.2. Impulsar y desarrollar un programa de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización permanente para el funcionariado público de los tres órdenes de gobierno, conforme al ámbito de la naturaleza de sus funciones.

1.1.3. Diseñar y promover esquemas específicos dirigidos a personas servidoras públicas que fungen como multiplicadoras para la conformación de cuadros especializados en la materia.

1.1.4. Crear, fortalecer y ampliar mecanismos de participación de la sociedad, organizaciones no gubernamentales, la academia y personas expertas en políticas públicas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.

Objetivo 2. Elaborar, promover y difundir acciones, estrategias, programas preventivos en materia de protección civil, reducción de riesgos y de atención a emergencias, en sus aspectos normativo, operativo, de coordinación y de participación hacia toda la población del Estado.

Estrategia 2.1. Generar la participación de la población en la organización de sistemas de prevención, advertencia y atención a emergencias.

Línea de acción

2.1.1. Promover simulacros de actuación para la prevención de riesgos.

2.1.2. Impulsar la participación de la sociedad en la organización de sistemas de prevención, advertencia y atención a emergencias con énfasis a la autoprotección ante riesgos y desastres antropogénicos y naturales.

2.1.3. Promover desde la niñez una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad.

2.1.4 Crear y promover la implementación de Comités de Protección Civil en población en los sectores urbanos y rurales.

Estrategia 2.2. Implementar acciones que protejan a la población y su entorno de riesgos provocados por un fenómeno perturbador.

Línea de acción

2.2.1 Realizar supervisiones de mitigación de riesgos para concientizar a la población para erradicar los asentamientos humanos en zonas de riesgo y alto riesgo.

2.2.2 Difundir a través de diversos medios las medidas preventivas ante fenómenos perturbadores.

Estrategia 2.3. Aumentar la red de respuesta inmediata en las acciones pre hospitalarias.

2.3.1 Crear una red de respuesta inmediata con agrupaciones paramédicas, primer respondiente, personas voluntarias y personal calificado, para así reforzar la efectividad.

Estrategia 2.4. Promover con los órdenes de gobierno proyectos y programas en protección civil y gestión integral del riesgo con enfoques diferencial y especializado.

Línea de acción

2.4.1 Impulsar la creación del atlas de riesgo en el Estado y en los municipios, así como su actualización.

2.4.2 Sensibilizar y capacitar a la población para lograr comunidades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

2.4.3. Inspeccionar y verificar que en instalaciones públicas y privadas cumplan con la normatividad en materia de protección civil y gestión integral de riesgos.

2.4.4. Impulsar, autorizar y supervisar los Programas Internos de Protección Civil.

Objetivo 3. Fortalecer marco normativo en materia de protección civil y gestión integral de riesgos.

Estrategia 3.1. Promover la armonización en la normatividad en materia de protección civil y gestión integral de riesgos.

Línea de acción

3.1.1 Promover la armonización en la normatividad para fortalecer las atribuciones y funciones de la Subsecretaría de Protección Civil y del Sistema Estatal de Protección Civil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

METAS



- Incrementar el número de acciones de capacitación de servidores públicos, de representantes del sector privado y de la sociedad en general.
- Crear un programa de capacitación para la profesionalización permanente del funcionariado público.
- Capacitar a personas servidoras públicas para que funjan como multiplicadores.
- Realizar eventos a servidores públicos.
- Realizar acciones mediante hipótesis de escenarios que permitan una mejor preparación para atender situaciones reales de desastres y emergencias.
- Promover eventos para la prevención, advertencia y atención a emergencias con énfasis a la autoprotección ante riesgos y desastres antropogénicos y naturales.
- Incrementar el número de personas impactadas mediante eventos de capacitación.
- Impulsar la creación de comités de protección civil en la población urbana y rural para lograr prevenir, orientar, apoyar y concientizar en lo relativo a la seguridad que se debe guardar en los casos de emergencias desastres, y promover sociedades resilentes.
- Supervisar zonas que se establezcan como de riesgo o alto riesgo mediante acciones necesarias para mitigarlas definiendo medidas para su reducción.
- Difundir las medidas preventivas ante fenómenos perturbadores a través de las distintas tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Fortalecer las acciones de respuesta inmediata con agrupaciones paramédicas, primer respondiente, personas voluntarias y personal calificado.
- Promover la creación del atlas de riesgo en el Estado y en los municipios, así como su actualización.
- Difundir información a la población para lograr comunidades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles.

• Cerciorarse que en instalaciones públicas y privadas se cumplan con la normatividad en materia de protección civil y gestión integral de riesgos.

• Promover que los entes obligados en la normatividad cumplan con la creación e implementación de sus programas internos de protección civil.

• Impulsar la armonización normativa para fortalecer las atribuciones y funciones de la Subsecretaría de Protección Civil y del Sistema Estatal de Protección Civil.

INDICADORES



• Número de capacitaciones y personas en materia de protección civil capacitadas.

• Número de programas aprobados y evaluación de su implementación para la profesionalización permanente del funcionariado público realizados.

• Número de eventos de capacitación a personas servidoras públicas realizados.

• Número de eventos de capacitación a personas en materia de gestión integral de riesgos beneficiadas.

• Número de simulacros para la prevención de riesgos con la participación de la población realizados.

• Número de eventos para la prevención, advertencia y atención a emergencias con énfasis a la autoprotección ante riesgos y desastres antropogénicos y naturales realizados.

• Número de personas para la prevención, advertencia y atención a emergencias con énfasis a la autoprotección ante riesgos y desastres antropogénicos y naturales realizados.

• Número de Comités de Protección Civil en la población urbana y rural creados.

• Número de supervisiones de mitigación de riesgos realizadas.

• Número de publicaciones informativas en TIC´S sobre medidas preventivas ante fenómenos perturbadores realizadas.

• Número de grupos voluntarios registrados, servicios prestados y personas impactadas realizadas.

• Número de Atlas de riesgos creados y actualizados.

• Número de personas en eventos de capacitación atendidas.

• Número de inspecciones públicas y privadas que cumplan con la normatividad en materia de protección civil realizadas.

• Número de programas de protección civil evaluados y aprobados.

• Número de Boletines Oficiales del Gobierno del Estado sobre normatividad en materia de Protección Civil publicados.



II.6. FEMINICIDIO

El feminicidio es la manifestación extrema de la violencia misógina. En Baja California Sur, aún cuando la incidencia de casos no alcanza los niveles alarmantes de otros estados de la República mexicana, es necesario e inaplazable tomar medidas de prevención como parte de una política global de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

La tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Estatal y la aplicación del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio llegaron tarde a Baja California Sur, hasta 2020,[57] por lo que en los casos de muertes violentas de mujeres ocurridas en los años previos no fueron medidos con justicia para la reparación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas.

De acuerdo con la información oficial de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJEBCS) en 2019, del total de muertes violentas de mujeres solamente dos casos pudieron ser tipificados como feminicidio debido a la ausencia de legislación; en 2020 y hasta octubre de 2021, 14 mujeres fueron víctimas de muertes violentas y de estos casos, con la puesta en marcha de los protocolos, la PGJEBCS logró acreditar 10 de ellos.

El Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado registra casos de violencia contra las mujeres sin poder atenderlos de manera suficiente debido a la carencia de personal capacitado y certificado que cuente con el conocimiento de la metodología y estrategias para el tratamiento profesional y la investigación de denuncias. El escalamiento de la violencia misógina que en algunos casos culmina en feminicidio o desaparición de mujeres podría prevenirse cuando todo caso de violencia sea atendido adecuadamente por las autoridades de manera oportuna.

Adicional a la carencia de personal capacitado y certificado, otro aspecto que dificulta la atención oportuna es el hecho de que el Centro de Justicia para las Mujeres se encuentra en la capital del estado, pero la incidencia de casos de violencia contra la mujer se ubica mayoritariamente en Los Cabos y en un sector socioeconómico de menores ingresos, por lo que es necesario ampliar el auxilio a este municipio a través de otro Centro de Justicia y vincular a los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé con oficinas receptoras de denuncias.

[57] Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de BCS el 31 de marzo de 2020.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 1. Fortalecer y garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, imparcial transparente y profesional a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 1.1. Acceso a la justicia y certeza jurídica para víctimas directas e indirectas de violencia de género incluyendo a niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

1.1.1. Fortalecer la investigación del proceso penal en asuntos de feminicidio.

1.1.2. Atención integral a familiares víctimas del delito de feminicidio.

Estrategia 1.2. Garantizar perfiles especializados y certificados de los servidores públicos que integran las áreas relacionadas con violencia de género.

Líneas de acción

1.2.1. Fortalecer la planta de especialistas, la capacitación y la certificación de los ministerios públicos, peritos e investigadores.

METAS

- Perfecccionar la investigación para incrementar los indicadores de vinculación a proceso, procedimiento abreviado, órdenes de aprehensión y juicio oral cuando la víctima/ofendido sea por delito de feminicidio.
- Atender todos los casos de muertes violentas de mujeres, mujeres trans y niñas bajo los protocolos internacionales, nacionales y estatales.
- Profesionalizar al personal operativo y sustantivo para estar actualizados en la normativa aplicable en materia de feminicidio.

INDICADORES

- Número de carpetas judicializadas de feminicidio realizadas.
- Número de atenciones a familiares de víctimas de feminicidio otorgadas.
- Número de capacitaciones de los ministerios públicos, peritos y agentes de investigación realizadas.



II.7. PERSONAS NO LOCALIZADAS

La desaparición forzada de personas y la privación ilegal de la libertad son crímenes de lesa humanidad. Constituyen violaciones graves y pluriofensivas que causan daños irreparables en las personas en situación de víctimas y también en su núcleo familiar y social afectando la salud, la economía y el bienestar general. También la gobernabilidad se ve perturbada por la percepción de inseguridad que las desapariciones provocan en la ciudadanía, particularmente cuando implican la negativa a reconocer la privación y ocultamiento de la persona.

En México, la desaparición de personas significa una crisis humanitaria, de violencia, de impunidad y forense; no existen cifras precisas del número real de personas no localizadas en la totalidad del territorio mexicano, sin embargo, a partir de la organización de la sociedad civil se ha logrado la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, así como las Comisiones Locales de Búsqueda, con lo que se establece la división funcional entre búsqueda de personas e investigación de los hechos, sin que esto implique desconexión sino trabajo complementario.

En Baja California Sur existen condiciones que hacen compleja la localización: la amplitud territorial, la migración constante y en ciertos casos, los delitos derivados del narcotráfico. Desde su creación en septiembre de 2019, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha efectuado 488 registros de personas desaparecidas o no localizadas, abarcando los 5 municipios y ubicando en Los Cabos el mayor número de desapariciones.

En cuanto a la información recabada se ha realizado el cotejo y homologación de carpetas y reportes entre la Comisión Estatal y la Procuraduría General de Justicia, lo que representa un avance para dimensionar el fenómeno.

Un aspecto que ha llegado a problematizar la presentación de denuncias se relaciona con la poca confianza de la ciudadanía hacia los Ministerios Públicos cuando perciben desinterés o riesgos, porque no es posible la garantía de seguridad a familiares. En este sentido la autoridad judicial debe aplicar los criterios de la ley en la investigación: máxima protección que significa la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno y la seguridad; enfoque humanitario, no discriminación, interés superior de la niñez, no revictimización, perspectiva de género, presunción de vida y derecho a la verdad, entre otros.

La Comisión Estatal ha encontrado que uno de los patrones identificados en la desaparición o no localización de mujeres es la ausencia voluntaria del hogar, lo que podría estar en relación con distintos tipos de violencia (psicológica, física, patrimonial económica y sexual) y hace urgente el fortalecimiento en todo el Estado del Centro de Justicia para las Mujeres a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia; este Centro cuenta con una base de datos en los que es posible investigar casos de violencia familiar en feminicidios, trata o desapariciones.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 1. Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la búsqueda de personas no localizadas.

Estrategia 1.1. Crear un grupo de trabajo coordinado para la Prevención y Erradicación de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Baja California Sur, integrado por los órganos correspondientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión de Búsqueda y las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

Líneas de acción

1.1.1. Elaborar el Plan Estatal de Búsqueda, conforme a lo estipulado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur y las leyes y protocolos vigentes.

1.1.2. Diseñar una metodología para la generación de los protocolos pertinentes en coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil, que incluya mecanismos de búsqueda e identificación de personas en casos de desastres naturales.

1.1.3. Acceder a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas las instituciones nacionales, estatales y municipales, para realizar la búsqueda de personas no localizadas.

1.1.4. Trabajar junto con las instituciones de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal para realizar acciones específicas de búsqueda de personas no localizadas.

1.1.5. Mantener comunicación con autoridades federales, estatales y municipales para la documentación y registro de casos.

1.1.6. Establecer y sostener mecanismos de comunicación interinstitucional para contar con información actualizada.

1.1.7. Colaborar con medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general para la búsqueda y localización de personas.

1.1.8. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos.

1.1.9. Integrar grupos de trabajo interinstitucionales, enfocados a la búsqueda, análisis e investigación estadística y contextual de la desaparición como instrumento en la activación de los diferentes tipos de búsqueda.

1.1.10. Promover las sesiones y seguimiento a la instalación del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por particulares para el Estado de Baja California Sur, con el objeto de coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las distintas autoridades estatales y municipales relacionadas con la búsqueda de personas.

Objetivo 2. Fortalecer y garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, imparcial, transparente y profesional implementando acciones eficientes y eficaces en el proceso judicial por parte de los servidores públicos en apego al marco legal y a los derechos humanos.

Estrategia 2.1. Acceso a la justicia.

Líneas de acción

2.1.1. Incrementar la judicialización de carpetas de investigación en materia de personas desaparecidas.

2.1.2. Fortalecer las acciones para la búsqueda y localización de personas por medio de la realización de Jornadas Integrales con garantías de seguridad, atención expedita, no discriminación y no revictimización.

2.1.3. Garantizar perfiles expertos de los servidores públicos que integran la Fiscalía Especializada por medio de la gestión de capacitaciones.

2.1.4. Reforzar el equipamiento en las Áreas de Análisis, Inteligencia, Política Criminal e Investigación Forense.

2.1.5. Fortalecer toda la base de recursos necesarios para la investigación y análisis forense.

2.1.6. Atender de manera expedita las solicitudes de las víctimas indirectas para el inicio de la Declaratoria Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas.

2.1.7. Fortalecer la colaboración con integrantes de colectivos de búsqueda.

2.1.8. Fortalecer la investigación del proceso penal de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de personas.

2.1.9 Fortalecer la certificación y capacitación constante en materia de búsqueda de personas, análisis de contexto, uso de recursos electrónicos y demás temas forenses en la materia.

2.1.10 Garantizar acciones de búsqueda eficientes por medio del desarrollo de prospecciones en campo por las autoridades encargadas de ejecutar los procesos de búsqueda, para documentar, sistematizar y ubicar contextos de hallazgo.

2.1.11. Gestionar el acceso de familiares de Personas No Localizadas al Registro Estatal de Víctimas en su condición de víctimas indirectas para ser sujetos de beneficios.

2.1.12. Gestionar ante las dependencias correspondientes apoyos alimentarios en especie consistentes en pensiones alimentarias o despensas para familiares de las víctimas directas.

2.1.13. Garantizar los derechos de las víctimas indirectas por medio del acceso a la asistencia victimal y a la asesoría especializada de equipos multidisciplinarios en la materia.

2.1.14. Fortalecer el acceso de las víctimas a una Atención Psicológica profesional que garantice una perspectiva psicosocial integral.

Objetivo 3. Localizar personas desaparecidas a partir de una colaboración e interoperabilidad de las diversas bases de datos y cruces de información disponibles.

Estrategia 3.1. Elaborar un diagnóstico integral sobre la problemática de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en el estado, así como analizar la información obtenida sobre desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y no localizaciones por las áreas de procesamiento de información y de análisis de contexto, así como en análisis de los resultados de las acciones y estrategias de búsqueda.

Líneas de acción

3.1.1. Recopilar y procesar información para la búsqueda, localización e identificación de personas.

3.1.2. Identificar instituciones y lugares en donde se pudieran localizar personas no localizadas con vida: centros de reclusión, centros de beneficencia, centros del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), hospitales psiquiátricos e instituciones de salud mental; asentamientos de personas en situación de calle; zonas de tolerancia para el trabajo sexual; casas de citas y masajes y centros de regulación sanitaria municipales, entre otros.

3.1.3. Recabar datos personales y generar registro de datos y perfiles biométricos, con equipo especializado, en las instituciones identificadas previamente.

3.1.4. Identificar posibles sitios web, como sitios de escorts, donde pudieran ser encontradas personas reportadas como desaparecidas.

3.1.5. Realizar campañas de difusión para la localización de personas con vida.

3.1.6. Difundir cédulas de búsqueda.

3.1.7. Realizar investigación sobre rutas migratorias en el estado a efecto de sistematizar la información; por tanto, se efectuará análisis de contexto para establecer rutas de personas migrantes mexicanas y centroamericanas que transiten por el estado con destino a zonas fronterizas; de igual manera con respecto a personas mexicanas y extranjeras que lleguen para residir en la entidad.

3.1.8. Realizar informes en respuesta a la solicitud de acceso a bases de datos Estatales y Nacionales para la búsqueda, localización e identificación de personas.

3.1.9. Realizar estudios individuales de análisis de contexto, con enfoque: diferenciado; en derechos humanos; de género; y en igualdad y no discriminación.

3.1.10. Realizar un diagnóstico integral con la información obtenida en los estudios de Análisis de Contexto y de Gestión y Procesamiento de la Información.

Objetivo 4. Localizar personas desaparecidas a partir de una colaboración e interoperabilidad de las diversas bases de datos y cruces de información disponibles.

Estrategia 4.1. Mejorar y eficientar el alcance de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Líneas de acción

4.1.1. Reforzar el equipamiento forense, de búsqueda en campo e identificación humana.

4.1.2. Dotar de herramientas y mecanismos especiales para el desarrollo de Análisis de Contexto, sistemas de Búsqueda Generalizada y de reporte o denuncia de Desaparición o No Localización de cualquier persona.

4.1.3. Participar en la integración y funcionamiento del sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso, tratamiento, y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.

4.1.4. Fortalecer los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales para mejorar el alcance de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, abarcando acciones de identificación, tamizajes, cruce de información, bases de datos, banco de información genética y documentación ministerial y forense.

METAS



• Elaborar el Primer Plan Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California Sur, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.

• Realizar el Primer Protocolo de Actuación de Búsqueda e Identificación de Personas en Casos de Desastres Naturales para el Estado de Baja California Sur, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

• Accesar a información generada por autoridades de los tres órdenes de gobierno para realizar cruces de información de registros de acciones de búsqueda generalizada.

• Realizar acciones de seguridad perimetral brindada por las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno con la participación de las víctimas indirectas.

• Trabajar de manera conjunta con las diferentes autoridades en los procesos de búsqueda para trasmitir y atender los reportes de desaparición o no localización recibidos y generados de manera inmediata.

• Buscar la designación de Enlaces Operativos de comunicación interinstitucional.

• Trabajar de manera conjunta en acciones que garanticen el derecho a la participación en las acciones de búsqueda y localización de personas.

• Realizar acciones de colaboración con Instituciones de Procuración de Justicia para la Investigación y Persecución de delitos de desaparición de personas y otros delitos vinculados.

• Crear grupos de trabajo multidisciplinarios interinstitucionales, que permitan la producción, recopilación y procesamiento sistemático de información encaminada a identificar patrones en la desaparición y no localización de personas en el estado.

• Gestionar Sesiones del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas que permitan coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las distintas autoridades estatales y municipales.

• Impulsar y promover la judicialización de las Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Estado.

• Realizar Jornadas Integrales de trabajo en todos los Municipios del Estado para garantizar el derecho de las Víctimas indirectas a recibir información de forma oportuna de los avances en la búsqueda e investigación.

• Garantizar los perfiles expertos y actualizados de los servidores públicos que integran la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados.

• Adquirir equipos forenses especializados para laboratorios en los procesos de identificación de personas desaparecidas o no localizadas en sus diferentes contextos de hallazgo.

• Contar con recursos materiales, humanos y tecnológicos especializados y suficientes que permitan fortalecer el análisis forense y la investigación para la localización e identificación de personas.

• Garantizar el reconocimiento, protección, la prevalencia, certeza y continuidad de la personalidad jurídica de los derechos e intereses de las personas desparecidas por medio de la gestión de las solicitudes iniciales de Declaratoria Especial de Ausencia.

• Realizar acciones para fortalecer los mecanismos de participación de los Colectivos de Búsqueda del Estado y su coordinación para la actualización y seguimiento continuo de los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas.

• Solicitar a la Fiscalía Especializada en la materia que realice actos de investigación específicos que incidan en la búsqueda, localización o identificación de personas, así como al esclarecimiento de los hechos en los términos de la normatividad vigente en la materia.

• Capacitar a servidores públicos expertos y actualizados que participan en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas bajo los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Búsqueda.

• Realizar informes de los procesos de Búsqueda en campo en sus diferentes tipos con garantías de seguridad por medio de prospecciones continúas enfocadas en la planeación y análisis de riesgos, condiciones del lugar, herramientas y equipo necesario.

• Gestionar el registro de las víctimas indirectas ante el Registro Estatal de Víctimas para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas para ser sujetos de beneficios.

• Gestionar ante las instituciones previamente identificadas apoyos en especie consistentes en pensiones alimentarias o despensas familiares para las víctimas directas.

• Atender solicitudes que garanticen el derecho de las víctimas a recibir asistencia victimal tanto jurídica como psicológica, así como la información oportuna de los derechos contenidos en la Cartilla de derechos de familiares de personas desaparecidas y/o no localizadas y los que les asisten de conformidad con la Ley General de Víctimas.

• Fortalecer la atención integral y psicosocial de las víctimas por medio del acceso a la atención psicológica personalizada y especializada.

• Procesar y gestionar la información contenida en los expedientes de búsqueda aperturados para la búsqueda, localización e identificación de personas.

• Identificar instituciones para definir escenarios de búsqueda en donde se puedan localizarse personas desaparecidas o no localizadas con vida.

• Recabar y generar documentos con registros de información para identificación de personas, como perfiles biométricos y sistemas de identificación disponibles.

• Realizar acciones para recopilar y sistematizar información que permita identificar sitios web, escenarios de búsqueda o información que incida en la localización de personas desaparecidas y no localizadas.

• Realizar campañas de difusión de información tendiente a la localización de personas.

• Difundir Cédulas, Protocolos, Alertas y Boletines de Búsqueda que permitan a la población coadyuvar con la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

• Realizar informes para diversificar la Búsqueda por patrones y el Análisis de Contexto por medio de la Investigación de rutas migratorias.

• Realizar informe de solicitudes de cruces de información estratégica de registros y bases de datos para la búsqueda, localización e identificación de personas.

• Elaborar estudios individuales para el análisis de contexto para producir hipótesis de localización y estrategias para el desarrollo metodológico de la búsqueda de personas.

• Realizar Diagnósticos Integrales que sume a los procesos de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos, victimológicos, estadísticos y geográficos de periodicidad anual.

• Adquirir herramienta especializada y equipo forense suficiente y actualizado con el objetivo de fortalecer el derecho de todos a la búsqueda en campo y laboratorios.

• Eficientar y reforzar por medio del desarrollo o adquisición de softwares informáticos especializados los departamentos que integran la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado.

• Participar en la articulación del Sistema Único en su integración y funcionamiento de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

• Hacer las gestiones necesarias para fortalecer los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

INDICADORES



- Número de Planes Estatales de Búsqueda, conforme a lo estipulado en la Ley formulados.
- Número de protocolos de búsqueda e identificación de personas en casos de desastres naturales creados.
- Número de solicitudes de información en plataformas, bases de datos y registros de instituciones nacionales, estatales y municipales consultadas.
- Número de acciones de búsqueda con seguridad perimetral a cargo de las instituciones de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal de personas no localizadas realizadas.
- Número de acciones de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales y número de documentos y registros de casos realizadas.
- Número de Enlaces Operativos de comunicación interinstitucional designados.
- Número de acciones realizadas con medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general para la búsqueda y localización de personas realizadas.
- Número de acciones de colaboración con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos realizadas.
- Número total de grupos de trabajo interinstitucionales, enfocados a la búsqueda, creados.
- Número de Sesiones Ordinarias o Extraordinarias del Mecanismo Estatal de Coordinación gestionadas.
- Número de carpetas judicializadas en materia de personas desaparecidas elaboradas.
- Número de jornadas integrales para fortalecer la búsqueda y localización de personas realizadas.
- Número de gestiones de capacitación para servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada realizadas.
- Número de equipos forense de laboratorio en materia de identificación de personas adquiridos.
- Número de acciones para fortalecer la investigación y análisis forense realizadas.
- Número de solicitudes iniciales de Declaratoria Especial de Ausencia atendidas.
- Número de acciones realizadas en colaboración con integrantes de colectivos de búsqueda.
- Número de solicitudes de actos de investigación a Fiscalía Especializada para mejorar y fortalecer la investigación y búsqueda de personas víctimas de desaparición realizadas.
- Número de eventos de capacitación en temas forenses realizados.
- Número de Informes de prospección en campo realizados.
- Número de gestiones en beneficio de familiares de personas desaparecidas realizadas.
- Número de apoyos alimentarios gestionados en beneficio de familiares de personas desaparecidas.
- Número de Solicitudes de Asesorías Especializadas atendidas.
- Número de Solicitudes de Atención Psicológica atendidas.

- Número de Expedientes de Búsqueda de personas procesados.
- Número de instituciones y lugares en donde se pudieran localizar personas no localizadas con vida identificados.
- Número de documentos integrados con datos personales, registro de datos y perfiles biométricos realizados.
- Número de acciones de búsqueda generalizadas electrónicas totales realizadas.
- Número de campañas de difusión realizadas para la localización de personas con vida.
- Número de cédulas de búsqueda de personas estatales y nacionales difundidas.
- Número de informes de investigación sobre rutas migratorias realizados.
- Número de informes de solicitudes con información específica de datos Estatales y Nacionales atendidas.
- Número total de estudios individuales de análisis de contexto realizados.
- Número de diagnósticos integrales realizados.
- Número de herramientas especializada y/o instrumentos forenses adquiridos.
- Número de Softwares para Búsqueda Generalizada desarrollados y/o adquiridos.
- Número de acciones para la integración y operación del Sistema Único para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas realizadas.
- Número de gestiones para eficientar el desempeño de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas realizadas.



II.8. TRATA DE PERSONAS

Sin duda la trata de personas es una grave afrenta contra los derechos fundamentales de las personas. Este delito requiere la atención expedita y efectiva para la solución y terminación de los casos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. El estado cuenta con un Protocolo de Investigación y de Actuación del Delito de Trata de Personas que fue publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado el 10 de abril de 2015.

Las investigaciones son llevadas a cabo por la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Trata de Personas y su judicialización es responsabilidad de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto. En la incidencia del delito de trata de personas al cierre del año 2021 se tuvo un registro de 5 carpetas de investigación.

La trata de personas debe ser perseguida y erradicada, por lo que es necesario concientizar a la población de la necesidad de presentar denuncias y actuar de manera solidaria con las víctimas.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 1. Fortalecer y garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, imparcial transparente y profesional a toda la ciudadanía, implementando acciones eficientes y eficaces en el proceso judicial por parte de los servidores públicos, en apego al marco legal y a los derechos humanos.

Estrategia 1.1. Acceso a la justicia.

Líneas de acción

1.1.1. Determinar las carpetas de investigación de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Trata de Personas.

Estrategia 1.2. Impulsar el fortalecimiento institucional en la agenciadel ministerio publico adscrita a la unidad especializada en investigacion del delito de trata de personas.

1.2.1. Fortalecer la capacitación de los Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de Investigación de la Unidad Especializada en Delito de Trata de Personas.

METAS

- Incrementar la judicialización de carpetas de investigación de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Trata de Personas.
- Profesionalizar con capacitaciones al personal operativo y sustantivo para estar actualizados en la normativa aplicable en materia de Trata de Personas.

INDICADORES

- Número de carpetas de investigación del Delito de Trata de Personas determinadas.
- Número de capacitaciones a los Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de Investigación de la Unidad Especializada en Delito de Trata de Personas realizados.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

BAJA CALIFORNIA SUR 2021-2027



II.9. PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y DESINTOXICACIÓN PARA USUARIOS DE DROGAS DURAS

El consumo problemático de sustancias psicoactivas representa una amenaza en todos los ámbitos de la persona y su entorno económico: afecta la salud y la integridad del individuo y de sus familias, provoca desintegración familiar, desempleo, deserción escolar, problemas de salud física y mental, conductas delictivas e inseguridad y en general afecta la convivencia pacífica de toda comunidad.

Actualmente la tendencia de la política pública para atender esta problemática apuesta por considerarlo como un problema de salud y busca romper con los estigmas que ha generado la criminalización del consumo de sustancias psicoactivas.

En Baja California Sur se observa que entre 2013 y 2018 ocurrió un desplazamiento hacia el consumo de drogas de impacto, pasando a ser la adicción a la metanfetamina el motivo mayoritario por el cual las personas buscan atención; sin embargo, muchos de los consultantes no responden a los tratamientos ambulatorios y requieren otro nivel de atención como servicio residencial.

En ese periodo, 1,329 personas solicitaron servicios de atención en los diversos establecimientos públicos y espacios de asociaciones civiles encargados de ofertar tratamientos para personas que presentan consumo de alcohol y otras drogas, representando el 64% del total de la demanda de servicios de atención por consumo de sustancias psicoactivas, siendo 762 personas las que recurrieron a servicios residenciales con modelos de ayuda mutua y mixtos (atención profesional y ayuda mutua) otorgados por los establecimientos de asociaciones civiles. 225 usuarios optaron por servicios profesionales ambulatorios de las Unidades de Especialidades Médicas Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) y 52 personas fueron atendidos en los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

Muchos de los usuarios activos en el consumo de sustancias no presentan consumos problemáticos manifiestos o, si los presentan, no los reconocen y por ello no acuden a las unidades de atención; otra causa es que muchos de los consumidores que son ingresados en establecimientos residenciales lo hacen debido a la gravedad de sus síntomas y, en otros casos, sus ingresos son involuntarios.

Respecto a la hospitalización, existen dos nosocomios que otorgan los servicios de psiquiatría: el Benemérito Hospital con Especialidades Juan María de Salvatierra que tiene un pabellón psiquiátrico destinado a pacientes con trastornos mentales agudos y en fase de desintoxicación de sustancias psicoactivas con una capacidad para 20 personas; asimismo, brinda servicios de consulta ambulatoria. La otra unidad es el Hospital Psiquiátrico de Baja California Sur, en donde se otorga atención a pacientes con trastornos crónicos y tiene una capacidad para 30 personas.

Actualmente los órganos de procuración de justicia requieren de manera legal la intervención de la Secretaría de Salud en los casos que se implementan medidas cautelares derivado de una falta o un delito asociado al consumo, portación, distribución y comercialización de estupefacientes y otras sustancias psicoactivas legales o ilegales. Algunas medidas cautelares implican la de proveer atención y tratamiento para quien se le ha interpuesto una medida cautelar, requiriéndose en múltiples ocasiones servicios de internamiento, esto derivado de diagnósticos de dependencia severa.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 1. Detección oportuna de casos activos en el consumo de sustancias psicoactivas o conductas de riesgo asociadas a la salud mental.

Estrategia 1.1. Impulsar acciones preventivas en materia de comportamiento adictivo en instituciones educativas y en las comunidades.

Líneas de acción

1.1.1. Implementar psicoeducación preventiva en ámbitos comunitarios y escolares.

1.1.2. Promover los servicios de atención prevención y tratamiento de las UNEME-CAPA/CECOSAMA.

1.1.3. Fortalecer la atención a la salud mental mediante la capacitación en la identificación y manejo de conductas de riesgo.

1.1.4. Impulsar acciones y actividades extramuros de salud mental y adicciones.

Objetivo 2. Fortalecer la atención y orientación a las familias de personas en condición de vulnerabilidad y/o activas en el consumo de sustancias o con trastornos de salud mental.

Estrategia 2.1. Involucrar activamente a los familiares de usuarios en talleres psicoeducativos para mejorar las relaciones familiares y comprender los trastornos mentales con base en la evidencia científica.

Líneas de acción

2.1.1. Establecer compromisos de atención integral para el usuario y su red de apoyo.

2.1.2. Reforzar el sistema de rescate de usuarios.

Objetivo 3. Fortalecer la red de los servicios de atención y tratamiento residencial enfocado en la fase inicial de tratamiento para la atención de los síndromes de supresión.

Estrategia 3.1. Impulsar acciones destinadas al proceso de desintoxicación que cumplan con los criterios normativos aplicables.

Líneas de acción

3.1.1. Fortalecer la red de atención de salud mental y adicciones, con énfasis en el tratamiento residencial de desintoxicación.

3.1.2. Promover e impulsar que los establecimientos residenciales de las Asociaciones Civiles cumplan con la normatividad NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

METAS



- Lograr contar con establecimientos de educación básica y media con programas preventivos en adicciones.
- Realizar las jornadas preventivas programadas, dirigidas a la población objetivo, sobre el uso de sustancias psicoactivas.
- Realizar las capacitaciones programadas en protocolos para la detección temprana e intervención oportuna en la atención de las adicciones.
- Lograr brigadas de salud mental y adicciones para acercar los servicios de salud mental a la población de comunidades prioritarias.
- Involucrar a familiares de personas usuarias de sustancias psicoactivas en actividades psicoeducativas de orientación preventiva y consejería en adicciones, para fortalecer su red de apoyo.
- Fortalecer la articulación y colaboración interinstitucional y comunitaria mediante la realización de acciones comunitarias de salud mental y adicciones que favorezcan la efectividad y continuidad de las intervenciones.
- Otorgar las becas de tratamiento residencial de desintoxicación gestionadas ante la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) y el Gobierno del Estado a personas usuarias de sustancias psicoactivas que lo requieran, conforme a la disponibilidad de recursos.
- Realizar las visitas de supervisión programadas a los establecimientos residenciales acreditados, verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable.

INDICADORES



- Número de establecimientos de educación básica y media que cuentan con un programa preventivo de adicciones realizados.
- Número de jornadas preventivas con temas de concientización en el uso de sustancias realizadas.
- Número de capacitaciones dirigidas a personal de salud de las instituciones públicas, en protocolos de detección e intervención temprana de adicciones realizadas.
- Número de brigadas de salud mental y adicciones activas atendidas.
- Número de personas que en actividades de orientación y consejería en adicciones participan.
- Número de acciones comunitarias de salud mental y adicciones con participación interinstitucional o comunitaria realizadas.
- Número de becas de tratamiento residencial de desintoxicación a personas usuarias de sustancias psicoactivas otorgadas.
- Número de supervisiones a establecimientos residenciales en apego a la normatividad aplicable realizadas.



PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

BAJA CALIFORNIA SUR 2021-2027

II.10. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y DUELO POR SUICIDIO

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se encuentra entre las 20 causas de defunción más importantes a nivel mundial y abarca todas las edades. Cada año más de 800 mil personas se suicidan en el mundo y por cada suicidio se estiman alrededor de 20 intentos. En la región de las américas es la tercera causa de muerte en personas de 20 a 24 años de edad y la cuarta en los grupos de 10 a 19 años y de 25 a 44 años.

El incremento en patologías como la depresión, la ansiedad, el estrés y el suicidio en el entorno de pandemia se manifestó en el mundo desde 2020.

El suicidio debe ser observado y prevenirse a partir de un enfoque de multicausalidad, tomando en cuenta sus condicionantes sociales, económicas y de salud mental. Las razones que lo motivan pueden originarse en circunstancias de crisis interna de la persona, depresión, enfermedad crónica, pérdidas; pero también ser provocadas por violencia doméstica, abusos, o bien, por dificultades económicas, sin olvidar la vulnerabilidad que provoca sufrir algún tipo de discriminación, como diversidad sexual, origen étnico o discapacidad.

En este contexto adquiere relevancia la reformulación de políticas públicas para una intervención global de las instituciones de Estado, enfocando la prevención del suicidio asociada al bienestar, incluyendo el acceso a servicios de atención médica y salud mental, así como la conformación de ambientes protectores en los que se fortalezcan los vínculos comunitarios a través de la cultura, el deporte y el trabajo.

El esfuerzo para prevenir los intentos y la consumación del suicidio deben incluir estrategias en el medio escolar como la vigilancia psicológica, apoyo en el desarrollo de aptitudes socioemocionales y proyecciones de vida, restricciones en el acceso a medios letales y el manejo informativo responsable con respeto a la privacidad de la víctima y sus deudos.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 1. Garantizar la atención y los servicios de salud para aquellas personas que se encuentren en algún tipo de riesgo suicida, así como a los familiares que hayan tenido alguna pérdida por suicidio.

Estrategia1.1. Impulsar las acciones para personas en riesgo suicida y sus familias.

Líneas de acción

1.1.1. Difundir y promover los protocolos de prevención, atención y seguimiento del comportamiento suicida con la finalidad de realizar intervenciones más eficaces.

1.1.2. Impulsar y promover la aplicación de un programa preventivo en instituciones de educación básica y media.

1.1.3. Disponer de camas hospitalarias en urgencias de adultos y una cama en urgencias pediátricas para la atención de personas que hayan realizado un intento de suicidio.

Objetivo 2. Contribuir a evitar la incidencia de casos de suicidio en el estado de Baja California Sur, mediante acciones de prevención, detección oportuna, atención telefónica y presencial especializada, vigilancia epidemiológica y posvención individual y familiar en lo relativo al comportamiento suicida.

Estrategia 2.1. Impulsar las acciones para personas en riesgo suicida y sus familias.

Líneas de acción

2.1.1. Incrementar el conocimiento científico a través de la capacitación del personal de salud para la detección, prevención y manejo efectivo de las personas con riesgo suicida.

Estrategia 2.2. Establecer programas de sensibilización y de prevención y atención del suicidio.

Líneas de acción

2.2.1. Promover jornadas de difusión para la prevención del suicidio con la participación de los medios de comunicación.

2.2.2 Promover lineamientos con los medios de comunicación y redes sociales para difundir información de manera responsable de acuerdo con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, sin normalización o sensacionalismo, descripción de métodos, imágenes o videos de la escena, persona o suceso; detalles específicos, estereotipos y juicios discriminantes.

METAS



- Lograr que los establecimientos de salud públicos cuenten con protocolos de prevención, atención y seguimiento del comportamiento suicida implementados, a fin de contribuir a la reducción de intentos y muertes por suicidio.

- Lograr que los establecimientos de educación básica y media programados cuenten con un programa preventivo de suicidio implementado, priorizando aquellos ubicados en zonas de mayor riesgo.

- Lograr que las unidades hospitalarias públicas cuenten con disponibilidad de camas en los servicios de urgencias para la atención de la salud mental y de intentos de suicidio, a fin de responder oportunamente a las emergencias.

- Lograr que las unidades médicas públicas cuenten con personal capacitado en protocolos de detección e intervención temprana de riesgo suicida, a fin de prevenir intentos y muertes por suicidio.

- Realizar campañas de difusión para la prevención del riesgo suicida, la identificación de señales de alerta y la promoción del acceso a servicios de salud mental.

- Difundir publicaciones sobre la prevención del suicidio en la página web y redes sociales de la Secretaría de Salud, con enfoque responsable y alineadas a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

INDICADORES



- Número de establecimientos de salud públicos que cuentan con protocolos de prevención, atención y seguimiento del comportamiento suicida implementados.

- Número de establecimientos de educación básica y media que cuentan con un programa preventivo de suicidio implementados.

- Número de unidades hospitalarias públicas que cuentan con camas en los servicios de urgencias para la atención de la salud mental y de intentos de suicidio disponibles.

- Número de unidades médicas públicas que cuentan con personal en protocolos de detección e intervención temprana de riesgo suicida capacitado.

- Número de campañas de difusión para la prevención del suicidio con participación de medios de comunicación realizadas.

- Número de publicaciones sobre prevención del suicidio difundidas en la página web y redes sociales de la Secretaría de Salud elaboradas.



II.11. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes funge como una institución que coordina y vincula con las demás instancias gubernamentales de los 3 órdenes, incluyendo las organizaciones civiles y académicos. Tiene el compromiso de implementar la política pública que se requiera para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

Como institución es importante identificar el estatus mismo y poder reconocer nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

La niñez y adolescencia enfrentan diferentes problemáticas a lo largo de su vida que pueden llegar a la afectar durante su desarrollo evolutivo mismo, por lo que el estado es el responsable de atender de manera puntual cada una de ellas y poder garantizar el bienestar de este sector en particular.

Para garantizar la adecuada protección de los derechos humanos, encargada se establecerán instrumentos, políticas, procedimientos y acciones de protección de todo y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ellos que dentro del Plan de Desarrollo Estatal 2021-2027, se tiene el compromiso de atender de manera integral bajo una política de carácter transversal en el cual cada una de las instituciones del Estado están obligadas a la contribución para el bienestar y desarrollo mismo.

El SIPINNA, cuenta con una herramienta de análisis de datos que permite la mejora y fortalecimiento de los programas y acciones. Esta herramienta permite como base la implementación de la política pública en inicio, desarrollo y seguimiento mismos. El Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes, creada a partir del convenio de colaboración entre gobierno del Estado y el Instituto de Estadística y Geográfica en Baja California Sur (INEGI), sin embargo, los indicadores carecen de información actualizada.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Para garantizar los derechos de los más de 236, 629, (CENSO 2020 INEGI) personas de 0 a 17 años donde más de 120,300 son hombres (50.8%) y más de 116,300 son mujeres (49.2%), adicional a esto se requiere un análisis que incluya datos sobre la inclusión y diversidad sexual, conocer estos indicadores permite los trabajos multidisciplinarios en el cual deberá atender las diferentes problemáticas que requieran de atención puntual como salud, educación, seguridad, discriminación, inclusión, violencia, pobreza, bienestar entre otras que se requieran de su atención.

En este sentido fortalecer la Comisión Para Poner Fin a Toda Forma de Violencia, impulsar la creación de primera infancia e impulsar el seguimiento de la Comisión Intersecretarial Para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITIBCS). Así como el seguimiento y fortalecimiento del Grupo para Prevenir el Embarazo Adolescente (GEPEA).

Se pretende el fortalecimiento de diferentes mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, como lo es el “Gabinete Infantil”, fundamental en la política pública, instrumento que da el parte aguas sobre las problemáticas que perciben las niñas, niños y adolescentes de acuerdo al desarrollo evolutivo de cada uno.

Objetivo general

Generar un marco normativo para proteger integralmente y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia y desarrollo de todas las niñas, niños y adolescentes del estado de Baja California Sur.

Objetivos específicos

Objetivo 1. Generar cambios sociales que promuevan el fortalecimiento y aumento de capacidades en el servicio público, incentivando e incrementando la participación efectiva y sistemática de niñas, niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos, que permitan garantizar cambios normativos, culturales, opiniones y que su perspectiva sea tomada en cuenta e incluidas en las decisiones que inciden en su bienestar y en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Estrategia 1.1. Revisar con la Comisión permanente de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Honorable Congreso del Estado, el marco legal para identificar obstáculos legales en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes e impulsar las modificaciones.

Línea de acción

1.1.1. Revisar la legislación civil, laboral y administrativa que obstaculice la garantía de ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 1.2. Impulsar la formación y profesionalización del servicio público sobre el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

1.2.1. Impulsar los programas de formación y profesionalización del servicio público que incluya los principios, derechos y temas de prioridad sobre la niñez y adolescencia.

1.2.2. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de los 3 niveles, asi como a la organizaciones civiles en temas de niñez y adolescencia.

Estrategia 1.3. Asegurar mecanismos de participación efectiva, igualitaria y sistemática de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos en que se desarrollan.

Líneas de acción

1.3.1. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración, a nivel nacional, estatal y municipal, que permitan a la infancia ejercer su derecho a la participación.

1.3.2. Fortalecer las acciones que garanticen la participación de niñas, niños y adolescentes.

Objetivo 2. Coordinar y vincular a los actores involucrados en la formulación, ejecución, desarrollo de políticas públicas para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo alianzas multisectoriales, fin de garantizar la institucionalidad requerida para el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 2.1. Fortalecer la operación del Sistema estatal y municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

2.1.1. Promover el funcionamiento y seguimiento del Sistema Estatal y sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

2.1.2. Desarrollar estrategias coordinadas que permitan el cumplimiento del programa Estatal de proteccion de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

2.1.3. Promover la conformación y articulación de instancias multidisciplinarias que fortalezcan las acciones enfocadas en niñas, niños y adolescentes.

2.1.4. Asesorar y apoyar en la formulación y fortalecimiento de los programas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

2.1.5. Promover la conformación de comisiones en los sistemas de protección estatal y municipal.

Estrategia 2.2. Coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno y actores estratégicos.

Líneas de acción

2.2.1. Establecer mecanismos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, sector social, académico, así como organismos internacionales para el cumplimiento de los programas nacionales, estatales y municipales.

2.2.2. Coordinar el intercambio de información y actualización de indicadores del sistema estatal de información de niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 2.3. Generar herramientas de análisis del gasto presupuestario.

Líneas de acción

2.3.1. Establecer mecanismos que permitan la elaboración de presupuestos de egresos con perspectiva de niñez y adolescencia.

Objetivo 3. Impulsar la igualdad sustantiva y no discriminación entre niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 3.1. Desarrollar acciones para reducir la brecha de desigualdad sustantiva y discriminación entre niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

3.1.1. Coadyuvar en implementar acciones que contribuyan a reducir la brecha de desigualdad y discriminación en niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.

3.1.2. Promover acciones especificas que apoyen a que niñas, niños y adolescentes indígenas, afromexicanos y diversa sexualmente ejerzan y disfruten de sus derechos.

Objetivo 4. Sensibilizar para efecto de modificar las conductas en nuestra sociedad y visibilizar buscando conciencia acerca de las problemáticas que acontecen en la entidad que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 4.1. Implementar estrategias que sensibilicen sobre las problematicas que afectan el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

4.1.1. Implementar campañas integrales e inclusivas de sensibilización y visibilización de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

4.1.2. Coadyuvar en el desarrollo de campañas educativas sobre la prevención de las enfermedades.

4.1.3. En coordinación institucional, instrumentar acciones sobre los efectos negativos del trabajo infantil, sectores social y privado.

Estrategia 4.2. Promover el acceso y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en lo relativo a desarrollo evolutivo de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

4.2.1. Fortalecer los mecanismos que promuevan los derechos sexuales y reproductivos.

Estrategia 4.3. Desarrollar vínculos con las instituciones de los 3 niveles de gobierno, para efectos de atender a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.

Línea de acción

4.3.1. Identificar las principales problemáticas que requieren de una atención integral.

4.3.2. Impulsar y fortalecer instancias multidisciplinarias responsables en la atención de las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.

METAS



• Generar documentos derivados de las reuniones técnicas y de análisis que se lleven a cabo con la Comisión de Niñas, Niños Adolescentes del Congreso del Estado de BCS.

• Impulsar los diferentes programas de capacitación y/o fortalecimiento a los servidores públicos en tema de la niñez y adolescencia, como el protocolo de acoso escolar, taller de fortalecimiento en la política pública de la niñez.

• Servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno se capaciten en los temas de prevención, atención y fortalecimiento de instituciones.

• Por medio de acuerdos y/o documentos se pretende impulsar y desarrollar las diferentes acciones institucionales que permitan a la niñez y adolescencia a participar y tomar en cuenta sus opiniones.

• Acciones como la implementación del gabinete infantil, consejo consultivo de adolescentes, los cabildos infantiles, foro de participación infantil entre otros.

• Efectuar acciones técnicas con las diferentes instituciones de los 3 niveles de gobierno para informar del panorama que se deberá atender de manera integral a las niñas, niños y adolescentes.

• Realizar acciones de coordinación para el cumplimiento del Programa Estatal de las Niñas, Niños y Adolescentes.

• Realizar acciones para implementar mesas técnicas con actores estratégicos, para efectos de atender la problemática que se presenta.

• Asesorar a las integrantes de las secretarías ejecutivas del SIPINNA, para efectos de mejorar y fortalecer los diferentes programas que se implementan.

• Crear e impulsar y dar seguimiento a las diferentes comisiones que se requieran, con enfoque sobre la niñez y adolescencia.

• Establecer convenios con actores estratégicos para la mejora y fortalecimiento del sistema estatal y los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

• Documentar acuerdos del trabajo coordinado con INEGI y las secretarías de los 3 órdenes de gobierno, sobre la actualización de los indicadores del Sistema Estatal de Información del SIPINNA.

• Elaborar el documento del Presupuesto de Egresos Anual, donde se plantean las necesidades institucionales que permitan la garantía, promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Realizar acciones de coordinación con las instituciones para concientizar a las niñas, niños y adolescentes en las malas prácticas que discriminen a su semejante y así promover los derechos sin importar su condición física o económica.

• Hacer acciones que promuevan y atiendan la reducción de la discriminación en escuelas y regiones específicas, así como impulsar las políticas de igualdad de derechos.

• Realizar la Campaña de Dale Derecho a tus Derechos.

• Implementar en coordinación con la Secretaría de Salud campañas para prevenir las enfermedades típicas en la niñez y adolescencia incluyendo la promoción de la cartilla de vacunación.

• Realizar acciones para coordinar y coadyuvar en campañas de los efectos negativos que causa el trabajo infantil y sus consecuencias y coordinar con autoridades en la implementacion de protocolos para su intervención y en su caso restitucion de los derechos.

• Establecer mecanismos en las ferias de la salud para la promoción de las cartillas de los derechos sexuales y reproductivos e implementar acuerdos a través del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo Adolescentes en BCS.

• Identificar la problemática que son de prioridad para el gobierno estatal y hacer un informe de las condiciones y posibles soluciones.

• Impulsar acciones para la intervención inmediata de actores estratégicos que atiendan de manera pronta una situación de riesgos.

INDICADORES



- Número de documentos que abonen a las reformas e iniciativas de Ley realizadas en beneficio a niñas, niños y adolescentes realizados.
- Número de programas que profesionaliza a los servidores públicos con enfoque en la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia realizados.
- Número de cursos que fortalezcan las capacidades a servidores públicos con enfoque a niñas, niños y adolescentes otorgados.
- Número de mecanismos de coordinación y colaboración que permitan garantizar la participación de las niñas, niños y adolescentes.
- Número de acciones donde se garantice la participación de las niñas, niños y adolescentes realizadas.
- Número de acciones enfocadas a fortalecer el sistema estatal y los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes efectuadas.
- Número de acciones que permitan el cumplimiento del programa estatal de las niñas, niños y adolescentes realizadas.
- Número de acciones para conformar y articular, instancias multidisciplinarias requeridas.
- Número de asesorías para el mejoramiento y fortalecimiento de los programas municipales de los SIPINNAS atendidas.
- Número de comisiones de protección integral conformadas que atiendan las diferentes problemáticas de niñas, niños y adolescentes realizadas.
- Número de Convenios de colaboración en beneficio de niñas, niños y adolescentes establecidos.
- Número de documentos que aporten en el intercambio y actualización de información al Sistema Estatal de Información del SIPINNA realizados.
- Número de documentos de presupuestos de egresos establecidos.
- Número de acciones que contribuyan a reducir la brecha de desigualdad y discriminación en niñas, niños y adolescentes realizadas.
- Número de acciones especificas en el fortalecimiento de la igualdad sustantiva y la no discriminación promovidas.
- Número de campañas donde se promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes implementadas.
- Número de campañas sobre la prevención de enfermedades apoyadas.
- Número de acciones para la prevención y el actuar de las instituciones sobre el trabajo infantil instrumentadas.
- Número de mecanismos que promuevan los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes realizados.
- Número de documentos que identifiquen las diferentes problemáticas de niñas, niños y adolescentes elaborados.
- Número de acciones que atiendan niñas, niños o adolescentes en situación de riesgo realizadas.

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO
BAJA CALIFORNIA SUR 2021-2027



II.12. TU BIENESTAR NOS UNE (DERECHOS HUMANOS)

Baja California Sur tiene como un compromiso fundamental, garantizar que las políticas públicas sean más incluyentes considerando todos los segmentos de población menos favorecidos, priorizando un enfoque de organización comunitario, participativo y basado en la equidad.

En este sentido, se impulsará la integración de las poblaciones más vulnerables, en particular de niñas, niños y adolescentes, pero no solo como beneficiarios o receptores directos, sino como verdaderos agentes de cambio.

Bajo esta mística de servicio, el PROGRAMA TU BIENESTAR NOS UNE deberá desdoblarse en estrategias y líneas de trabajo que fortalezcan la protección social, para lo cual se considera el establecimiento de metas e indicadores medibles, que permitan monitorear y conocer gradualmente el progreso e impacto, en el propósito de reducir las brechas de desigualdad social y económica que aún subsisten en nuestra entidad.

Ningún plan o programa gubernamental tiene sustento sin tomar en cuenta la estadística básica referencial que nos permite dar certeza y solvencia a la ruta trazada, misma que deberá contemplar la toma de decisiones más acertadas y seguras para el logro de los objetivos propuestos, en congruencia con este proemio, Baja California Sur está considerada como una entidad con un grado de marginación o exclusión social bajo.

En el año 2020, el estado se ubicó en el lugar 22 a nivel nacional, entendiéndose que la medición contempla aquellos mayormente marginados y que ocupan los primeros lugares con respecto a los que registran menor grado de marginación, lo cual indica que solo 10 entidades de la república se encontraban en mejores condiciones sociales que Baja California Sur.

Por lo que respecta a la medición del desempeño social que se complementa con las mediciones de carácter económico, nos encontramos con el Índice de Progreso Social (IPS) que hace una valoración del bienestar de las personas y está basado en varios indicadores sociales y ambientales para agrupados en tres dimensiones del progreso social: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades.

Los resultados de esta medición entre los años 2019 y 2020, muestran que dos tercios de las entidades disminuyeron en su IPS y en el caso de BCS pasó de la posición 25 al lugar 13, lo que indica evidentemente una mejora sustancial en cada una de las tres dimensiones de este índice.



Posición	Estado	Puntaje	Cambio respecto a 2019
1	Nuevo León	72.8	→
13	**Baja California Sur**	**68.5**	↑
32	Guerrero	56.8	→

Comparativo respecto de los estados con el puntaje mas alto y mas bajo

Asimismo, a partir de datos estadísticos del CONEVAL, basados en la Encuesta de Ingresos y Gastos en los Hogares de 2020, el 27.6% de la población del estado, viven en pobreza y el 2.9 en pobreza extrema.

Porcentaje de la población en situación de pobreza y pobreza extrema en Baja California Sur

Periodo	% Pobreza	% Pobreza extrema
2016	22.1	1.6
2018	18.1	1.5
2020	**27.6**	**2.9**

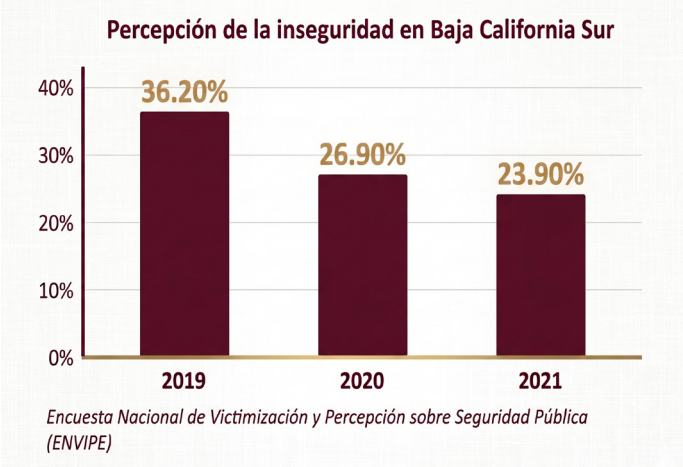
Fuente: Estimaciones con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y con el Modelo Estadístico para la continuidad del MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Es importante precisar que la desigualdad social, la falta de oportunidades educativas, laborales son detonantes para generar sentimientos de frustración y privación económica, lo cual hace que las personas sean proclives o susceptibles de unirse a grupos delincuenciales o que en forma individual se cometan delitos con la finalidad de obtener lo esencial para sobrevivir.

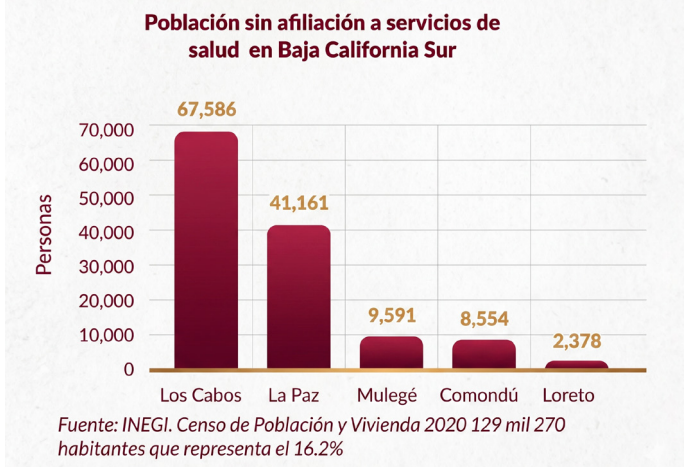
En concordancia con tal criterio, el Banco Mundial sostiene la premisa que a menor desigualdad se tiene como reflejo una tasa delincuencial menor, lo cual fue corroborado en un análisis realizado a más de 2,000 municipios del país. La investigación sugiere que la relación entre violencia y desigualdad social generan una sensación de injusticia entre las personas en desventaja, lo cual les lleva a buscar de alguna forma de equilibro social y económico por otras vías, que en muchos casos incluyen actividades ilícitas por lo que en cuanto más escasas o limitadas sean las oportunidades económicas para los más pobres y mayor sea la brecha de ingreso entre pobres y ricos, los beneficios económicos derivados de actividades delincuenciales tienden a ser mayores.

La percepción de inseguridad, según la más reciente medición de la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción) en mayores de 18 años considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día, con el 58.9 % seguido del desempleo con 41.5 % y la salud con 40.2 %.

En el año 2021, la percepción de inseguridad entre los sudcalifornianos alcanzó el 23.9 %, por lo que corresponde a la población sin afiliación a servicios de salud, el Censo de Población y Vivienda 2020 arroja que 129,270 personas no tienen afiliación a servicios de salud.



Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)



Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 129 mil 270 habitantes que representa el 16.2%

En ese tenor, reducir los niveles de delincuencia es imprescindible para que el gobierno logre avances notables para disminuir los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo, pero fundamentalmente, para continuar promoviendo el crecimiento económico y la implementación de políticas sociales efectivas.

Para tal efecto, por ejemplo, será necesario mantener y consolidar las políticas enfocadas a los jóvenes para integrarlos y mantenerlos en el mercado laboral y reducir los niveles de deserción escolar en todos los niveles de educación básica, media superior y superior. La educación como hilo conductor de una transformación profunda de la vida pública sudcaliforniana.

Es importante señalar que las principales características del PROGRAMA ESTATAL “TÚ BIENESTAR NOS UNE”, están relacionadas con diversas acciones a emprender sustentadas en aspectos técnico-legales, derivadas de la legislación vigente en Baja California Sur, tareas que gradualmente se implementarán con la participación de los tres órdenes de gobierno, considerando el ámbito específico de sus competencias y facultades.

Este programa será coordinado y evaluado por la Secretaría General de Gobierno, que tiene como potestad la conducción de las relaciones entre los poderes legislativo y judicial, ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos, además de colaborar con el Ejecutivo del Estado en la conducción de la política interna y vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo, especialmente el respeto a los Derechos Humanos y así como fungir como promotor de la cultura cívico-política de los ciudadanos y los mecanismos de participación ciudadana.

Tendrá además sustento en la integración de Comités Ciudadanos en cada colonia y comunidad de nuestro estado, mismos que serán encargados de mantener una comunicación directa y permanente con la comunidad, a fin de conocer las problemáticas existentes y así vincular las acciones de los tres órdenes de Gobierno, además de la participación activa de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y la Guardia Nacional.

Asimismo, la Secretaría General de Gobierno atenderá los asuntos en materia de población y de Protección Civil y fomentará la participación en esta materia de los sectores público, social y privado para conducir y evaluar las políticas y programas relativos a la seguridad pública, de conformidad con las leyes y ordenamientos administrativos aplicables.

La instrumentación de este Programa promueve la participación de los 3 órdenes de gobierno, bajo la coordinación directa de la Secretaría General de Gobierno, así como de instituciones coadyuvantes.

Es así que, por parte del Gobierno del Estado están involucradas todas las Secretarías y órganos de la Administración Pública Estatal, en virtud de que sus estrategias y líneas de acción tienen convergencia con el objetivo del referido programa.

Por cuanto al Gobierno Federal, es pertinente lograr la participación de todas las Secretarías y órganos federales que tienen una representación estatal, destacando la participación activa y colaboración de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

Referente a los Gobiernos Municipales es evidente la necesidad de conjuntar esfuerzos de todas las instituciones y áreas que los conforman, fundamentalmente de las dependencias relacionadas con la prestación de servicios a la ciudadanía, seguridad y protección civil, entre otros.

Involucrar al sector empresarial es prioritario con el fin de que las organizaciones constituidas por las cámaras y asociaciones de distintos ramos contribuyan con el gobierno en las acciones previstas en este programa.

De particular importancia están los Comités Ciudadanos como instancias de participación social, conformados por los propios integrantes de la comunidad.

El PROGRAMA “Tu Bienestar Nos Une” garantiza el ejercicio ciudadano de los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad a la alimentación, a la asistencia social, al acceso a la cultura, a la cultura física y el deporte en sus acciones específicas o en las que intervienen:

La Secretaría de Salud, promoviendo estilos de vida que combatan las movilidades de mayor incidencia; desarrollando campañas, brindando servicios de diagnóstico mediante unidades médicas móviles; atendiendo urgencias epidemiológicas y también otorgando servicios de salud mental para prevención y tratamiento de las adicciones focalizando el apoyo a usuarios de drogas duras, así como la prevención del suicidio.

La Secretaría de Educación Pública, instrumentando actividades diseñadas para la consolidación de identidades y el uso positivo del tiempo libre.

Instituciones dedicadas a desarrollar obras y acciones de infraestructura, medio ambiente y seguridad, creando espacios con criterios de ciudades seguras en el diseño, construcción y electrificación, de un medio ambiente limpio y con vigilancia.

La Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, con acciones que susciten la inclusión e igualdad social y la vida libre de violencia y de discriminación para mujeres, niñas, niños, adolescentes, indígenas, afromexicanos y personas con diversidad sexual.

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte, llevando a cabo actividades de cultura física y deporte en colonias y comunidades.

Participan también la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra Mujeres de la PGJEBCS, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Mesa para la Construcción de Paz en el estado, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, el Centro Estatal de Salud Mental y la Secretaría General de Gobierno a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal; así como también organizaciones de la sociedad civil y expertas y expertos que pertenecen a organismos nacionales e internacionales.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
BAJA CALIFORNIA SUR 2021-2027

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Acciones concurrentes para la prevención social de la violencia y la delincuencia.[58]

Objetivo 3. Contribuir al fortalecimiento y aplicación de políticas públicas que atiendan las causas estructurales para la paz social y se promuevan el respeto a los Derechos Humanos.

Estrategia 3.1. Reforzar la cohesión social y la participación ciudadana en la prevención de la violencia y la delincuencia.

Líneas de acción

3.1.1. Promover el fortalecimiento de ambientes familiares libres de violencia.

3.1.2. Promoción la sensibilización, mediación comunitaria y promoción de una cultura de paz.

Estrategia 3.2. Promover la reducción de brechas de desigualdad, el desarrollo económico inclusivo para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad.

Líneas de acción

3.2.1. Impulsar y coordinar una red de atención integral a necesidades básicas.

3.2.2. Promover y fortalecer la participación de las instituciones y organizaciones en el desarrollo, económico, social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad.

Estrategia 3.3. Intervención en los factores comunitarios para el fortalecimiento del tejido social.

Líneas de acción

3.3.1. Promover e impulsar la creación y rehabilitación de espacios comunitarios seguros y libres de violencia.

3.3.2. Promover e impulsar acciones para la participación comunitaria y la reconstrucción del tejido social.

Estrategia3.4. Fortalecer la coordinación institucional para la prevención y atención de la violencia y la delincuencia.

Líneas de acción

3.4.1. Implementar acciones para el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

3.4.2. Crear y fortalecer mecanismos eficientes para la atención y restitución de derechos a víctimas de violencia.

Estrategia 3.5. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos con enfoque los grupos en situación de vulnerabilidad.

Líneas de acción

3.5.1. Coordinar e impulsar la transversalización del enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas estatales.

3.5.2. Instrumentar mecanismos y acciones para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos en instituciones públicas, privadas y sociales.

[58] Objetivos 1 y 2 pertenecen al Eje II.4. Gobernabilidad y paz social.

METAS



- Hacer acciones para contribuir a que se generen ambientes familiares libres de violencia.
- Realizar acciones para promover y reforzar una cultura de paz en la comunidad.
- Hacer acciones para atender las causas sociales que puedan ser detonantes o generadoras de ambientes violentos.
- Realizar acciones para reducir las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables.
- Desarrollar acciones para propiciar espacios de desarrollo comunitario, seguros, aptos para el esparcimiento y la sana convivencia.
- Efectuar acciones para impulsar la participación comunitaria y la reconstrucción del tejido social.
- Realizar acciones para propiciar la atención eficiente y oportuna a las personas en situación de vulnerabilidad.
- Hacer acciones para articular de manera más eficiente los mecanismos de atención a víctimas de violencia.
- Efectuar acciones para promover el enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas estatales.
- Ejecutar acciones para promover, garantizar y defender los derechos humanos en todos los ámbitos.

INDICADORES



- Número de acciones implementadas para la prevención de la violencia realizadas.
- Número de acciones de mediación y sensibilización para la prevención de la violencia y la delincuencia realizadas.
- Número de acciones para coordinar una red de atención integral a necesidades básicas realizadas.
- Número de acciones para promover el desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad realizadas.
- Número de acciones para la creación, recuperación y apropiación de espacios libre de violencia realizadas.
- Número de acciones para impulsar la participación comunitaria realizadas.
- Número de acciones para fortalecer la coordinación institucional para la atención de personas en situación de vulnerabilidad realizadas.
- Número de acciones para fortalecer y eficientar los mecanismos atención a víctimas de violencia implementadas.
- Número de acciones para impulsar la transversalización del enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas estatales implementadas.
- Número de acciones para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos realizadas.